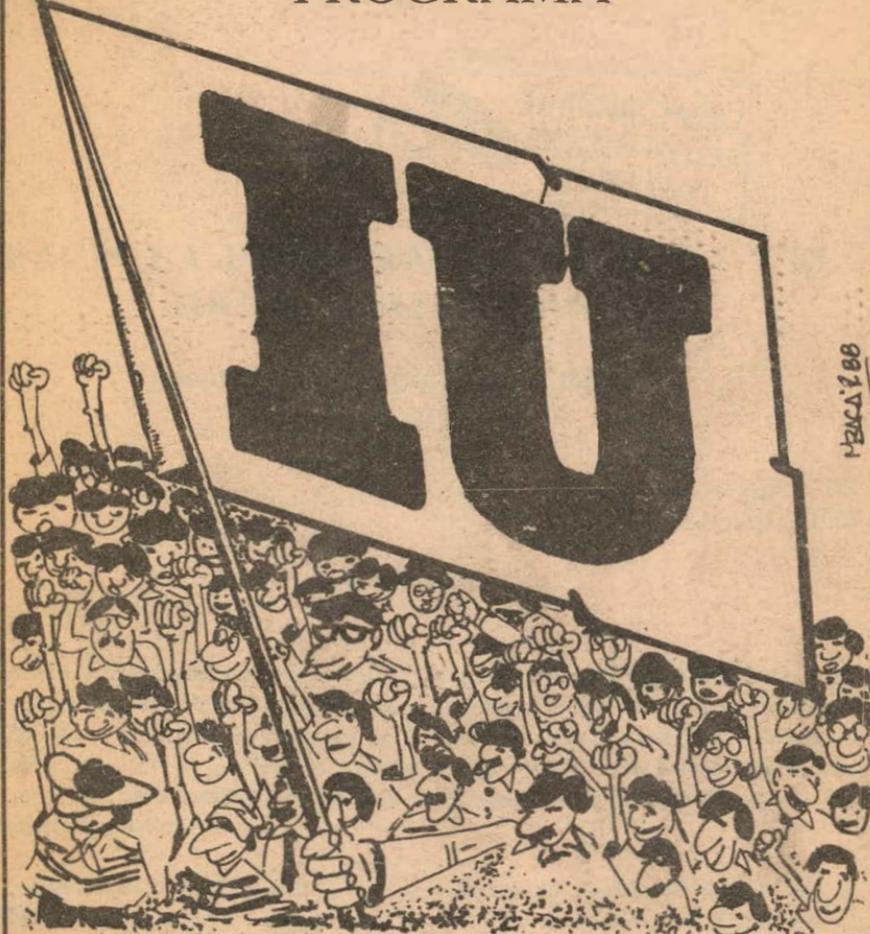


PROGRAMA



1981

I CONGRESO NACIONAL
IZQUIERDA UNIDA

UNMSM-CEDOC

HACIA LA DEMOCRACIA POPULAR Y EL SOCIALISMO PERUANOS

Lineamientos Programáticos para el I Congreso de I.U.

Versión terminada de aprobar por el CDN de IU el 14 de julio de 1988

Introducción.

Izquierda Unida es un frente revolucionario de masas de orientación socialista integrado por organizaciones políticas y militantes sin afiliación partidaria que se adhieren a su programa y estrategia y se rigen por sus Estatutos. Su objetivo consiste en realizar la revolución en el Perú, alcanzar la liberación nacional, establecer un Estado Democrático Popular que abra camino al socialismo apoyándose en la creatividad, capacidad y organización del pueblo.

El periodo actual está marcado por el agotamiento del modelo económico que el capitalismo dependiente y semicolonial ha impuesto en nuestro país. Signos de ese agotamiento son la prolongada retracción de inversiones privadas, la fuga de capitales, la mayor desarticulación nacional, la permanente reducción de las remuneraciones, el persistente deterioro de las condiciones de vida de las mayorías nacionales. También son expresiones de dicho agotamiento, la existencia de una deuda externa impagable, la incapacidad del Estado para obtener ingresos y atender las demandas sociales, la

impunidad frente al delito común, el narcotráfico y la inmoralidad en la gestión pública y privada.

La crisis actual ha provocado la agudización del problema nacional y de la discriminación étnico-cultural, que el Perú heredó de la Colonia y que el capitalismo sigue aprovechando para acentuar la explotación del trabajador, además, la falta de empleo obliga al pueblo a aceptar condiciones de trabajo inhumanas y al margen de la ley.

La violencia en el país tiene causas estructurales, y ha sido en la historia del Perú hasta la actualidad el método privilegiado por las clases dominantes para contener las legítimas aspiraciones populares. Frente a ello, las clases populares han resistido y se han rebelado desarrollando diversas formas de lucha que forman parte de las tradiciones de nuestro pueblo.

Desde 1980, se desarrolla una compleja espiral de violencia que tiene varios ingredientes principales, el terrorismo ajeno a la voluntad popular desplegado por Sendero Luminoso, la respuesta del Estado basada principalmente en la unilateralización de la estrategia militar y en el desarrollo de la "guerra sucia" y la presencia de grupos paramilitares del Apra y de los narcotraficantes. Dicha situación puede generar una creciente militarización de la política y la extensión de la violación cotidiana de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad y de la propiedad de los peruanos, sobre todo de los que viven en las zonas de emergencia.

La pretensión de imponer a las masas como métodos de lucha el terrorismo y la misma vía armada, sirven de justificación para una represión indiscriminada que desarma al pueblo, destruye sus organizaciones gremiales y dificulta la unidad popular que es fundamental para que afrontemos con todo el pueblo el reto histórico del presente.

En las circunstancias actuales, las acciones armadas que realiza el MRTA, no obstante sus diferencias conceptuales y metodológicas con Sendero Luminoso, crean distorsiones en el seno de las organizaciones del campo popular, dificultan la labor de organización y movilización e impiden una adecuada vinculación entre la lucha por la paz con justicia, por la democracia y por el socialismo.

La crisis es estructural y la gran burguesía es incapaz de proponer un proyecto económico nacional que atienda las demandas populares y forje una nación unida, democrática, no alineada y soberana. Eso no significa que la gran burguesía aliada al imperialismo, sobre todo norteamericano se encuentre sin alternativas políticas con las cuales pretenda

perpetuarse, ni que haya perdido vigencia e influencia en el país. Mientras IU no logre consolidar su unidad y la de los trabajadores y campesinos, aglutinar a los sectores populares y medios, incluyendo a los empresarios nacionalistas, la gran burguesía aliada al imperialismo seguirá dirigiendo los destinos del Perú.

Izquierda Unida en su proceso de desarrollo tiene que asumir tareas inéditas en la historia de la izquierda peruana, y hasta cierto punto, en la de la lucha revolucionaria mundial. Su arraigo de masas y la confianza que ellas tienen en el Frente, la colocan ante la inabarcable tarea de poner en práctica su estrategia de gobierno y de poder, y de asumir la responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, en momentos en que se requiere de un desarrollo acelerado de su organización, su unidad y su capacidad de dirección política de todo el pueblo, para llevar adelante las transformaciones que necesita el Perú.

La historia ha colocado a IU ante la necesidad de incorporar la lucha por el gobierno y el ejercicio de gobernar como parte del proceso por el cual el pueblo destruye la dominación imperialista y el poder monopólico de la gran burguesía, transforma la organización del Estado, democratiza la sociedad e inicia la transformación revolucionaria de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del país. Esta estrategia de gobierno y poder levantará un auténtico proyecto nacional capaz de convocar a la mayoría del pueblo y acometer conjuntamente las difíciles circunstancias por las que pasa el país.

Frente a este reto, no es posible evadir la responsabilidad de luchar por ser gobierno o de asumirlo plenamente, con argumentos maximalistas que proponen objetivos de realización imposible en el Perú de hoy, ni reduciendo las tareas del momento a aquellas que son posibles sólo desde la tecnocracia estatal y con prescindencia de la participación de las organizaciones populares y de la militancia izquierdista.

El gobierno de IU será democrático y antiimperialista, y en él verán reflejadas sus aspiraciones todas las fuerzas políticas y sociales que estén dispuestas a luchar por la democracia, la liberación y el progreso del Perú.

El pueblo confía en su propia capacidad de gobierno y en la de IU para gobernar a su favor, revertir las tendencias de deterioro de su vida diaria y encontrar paz con justicia social.

El inédito reto teórico y práctico, programático y político que tiene IU, en la presente etapa, es lograr que la lucha por el gobierno nacional, y el ejercicio de esa responsabilidad, se constituyan en un elemento que coadyuve a la construcción del poder popular, es decir, que sea un factor de avance de la soberanía popular, de creciente organización y

conciencia democráticas y nacionalistas y, a la inversa, de debilitamiento de las fuerzas antidemocráticas y antipatrióticas.

Los riesgos de enfrentar ese reto, están todos los días delante de IU. Ellos son la causa más legítima de algunos descontentos existentes en ciertos sectores de la militancia, y obligan a enfrentar la lucha por el gobierno y el poder con gran creatividad programática y política, y a explorar con nueva energía la ruta de la revolución en el Perú. Algo es, sin embargo, meridianamente claro, no hay forma de evadir el reto. La organización y consolidación del poder popular será la única garantía para que la reacción no intente revertir las transformaciones. Esto exige que las tareas políticas que enfrenta IU haya que encararlas con realismo y decisión.

IU busca conquistar el poder económico, político y moral para asegurar el bienestar y la felicidad del pueblo peruano y lograr la afirmación del derecho democrático a la vida y a la libertad. Estas tareas presuponen la participación popular en las decisiones económicas y políticas y la consolidación de la identidad nacional y una presencia soberana y no alineada del Perú en el mundo actual.

El poder popular, además, estará sostenido y consistirá en la capacidad del pueblo organizado para transformar las estructuras económicas y políticas y organizar y dirigir la producción de los bienes necesarios para todos, desde dentro de las empresas públicas y privadas y desde un Estado planificador.

En ese camino, es imprescindible, desde ahora fortalecer la presencia organizada, unitaria y democrática del pueblo, en la sociedad y en el Estado.

Por todo lo señalado, los lineamientos programáticos de IU tienen que incluir:

- I.- la visión del socialismo peruano por el que lucha IU,
- II.- los retos principales de la realidad nacional en el camino de la construcción del socialismo,
- III.- los deslindes programáticos con el gobierno actual,
- IV.- las diferencias programáticas con el Frente de la derecha peruana (FREDEMO), y
- V.- los lineamientos para el Plan de Gobierno de IU en la presente etapa.

I.- EL SOCIALISMO.

El Perú socialista, objetivo histórico y razón de ser de Izquierda Unida, será un país donde todos tienen garantizado el derecho a una vida digna como consecuencia de la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, donde se puede expresar toda la capacidad solidaria y creadora de los trabajadores del campo y la ciudad con libertad y en democracia, con amplia participación popular dentro de una institucionalidad estatal donde el autogobierno sea ejercicio cotidiano y con personalidad propia y posición no alineada en el concierto internacional. Este Perú socialista será construido en base a la convergencia de todos los sectores sociales interesados en transformar el país, en especial por la alianza obrero-campesina.

El socialismo que propugna Izquierda Unida toma en cuenta el legado del Amauta José Carlos Mariátegui, las enseñanzas de nuestro pasado, la experiencia internacional de otros pueblos que han luchado y luchan por su liberación nacional y el socialismo. También aprende de los diversos cambios que permanentemente se realizan en las experiencias socialistas. Reivindica, asimismo, su originalidad hundiéndola sus raíces en la historia de la lucha social peruana y en la visión del Perú que nos legaron también César Vallejo, José María Arguedas, y otros combatientes que han entregado su vida a la causa popular, democrática y nacional.

Por ello nuestro socialismo implica, la transformación revolucionaria y democrática del Estado y de las relaciones de producción capitalistas, de tal forma que se cuente con los instrumentos y las capacidades humanas indispensables para poner todos los recursos productivos y los excedentes económicos al servicio del pueblo y del desarrollo nacional independiente, que debe ser planificado, armónico y descentralizado.

En el socialismo peruano se afirmará de una manera original y propia, las conquistas populares del pasado y del presente y basados en ellas haremos nuestro aporte a la cultura artística y científica universales, interactuando en condiciones de igualdad, mutua emulación y aprecio con todos los pueblos del mundo.

Las particularidades nacionales de la lucha por el poder, las tradiciones culturales nacionales y populares y la absorción voluntaria y selectiva de las experiencias universales irán configurando los rasgos más específicos y propios del socialismo peruano a construirse.

En lo inmediato los objetivos del cambio que proponemos como parte de las tareas a resolver por el Gobierno Democrático Popular, se pueden sintetizar en las cinco Garantías Nacionales y Populares aprobadas por el IV Comité Directivo Nacional Ampliado. Ellas expresan la voluntad de IU de garantizar, esto es, de hacer realidad operante e incuestionable, y no letra muerta, los derechos humanos de todo tipo, tanto colectivos como individuales, que los rezagos del pasado colonial, y la lógica inhumana del capitalismo y del imperialismo impiden ejercer a cabalidad.

1) GARANTIA DEL DERECHO DE TODO EL PUEBLO A LA VIDA, LA PAZ, Y AL DESARROLLO LIBRE DE SUS CAPACIDADES.

2) GARANTIA DEL PLENO EMPLEO QUE HAGA REALIDAD EL DERECHO DE TODOS AL TRABAJO Y QUE AFIRME LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR.

3) GARANTIA DEL DERECHO DEL PUEBLO A DECIDIR SU DESTINO MEDIANTE LA PARTICIPACION EN LA DECISION ECONOMICA, EL AUTOGOBIERNO Y LA CONSTRUCCION DE UN ESTADO POPULAR, DEMOCRATICO Y DESCENTRALIZADO.

4) GARANTIA DEL DERECHO A EXPRESAR Y FORJAR UNA CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL Y POPULAR, Y A DESARROLLAR UNA ETICA BASADA EN LA HONESTIDAD Y LA SOLIDARIDAD.

5) GARANTIA DEL DERECHO A LA INDEPENDENCIA Y DIGNIDAD NACIONALES FRENTE AL IMPERIALISMO, A LA AUTONOMIA EN LAS RELACIONES EXTERNAS, Y A EJERCER LA SOLIDARIDAD CON TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO DESDE UNA POSICION DE NO ALINEAMIENTO.

La lucha por conquistar estas garantías no puede esperar. El aprecio por ellas y la lucha diaria por acercarse a su plena vigencia se alimentan mutuamente.

Las conquistas populares, por muy parciales e insuficientes que aún sean, han extendido y profundizado la conciencia del pueblo. Las respuestas exitosas que ha dado el pueblo organizado a los urgentes problemas diarios han potenciado su confianza en sus propias capacidades, han enseñado las primeras lecciones del autogobierno y han puesto los cimientos de la aspiración socialista.

EL LAS GRANDES CONTRADICCIONES Y
PROBLEMAS ENFRENTAR Y SUPERAR EN
EL MUNDO EN TRANSICIÓN

II.- LAS GRANDES CONTRADICCIONES Y PROBLEMAS A ENFRENTAR Y SUPERAR EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO PERUANO

La realidad del Perú actual está marcada por la gran contradicción existente entre el Perú como nación y el imperialismo y sus aliados internos. Ella se expresa en varias formas particulares, entre las cuales destacan 8 contradicciones: 1.-entre la herencia colonial y las luchas nacionales y democráticas, 2.- entre el imperialismo y la nación peruana, 3.-entre el Estado antidemocrático y el proceso de democratización, 4.-entre la relación capital-trabajo y el fracaso de la acumulación, 5.-entre el campo y la ciudad, 6.- entre la concentración de capital y el empleo productivo, 7.-entre la división internacional del trabajo y la nacionalización de la economía, y 8.-la cuestión de la identidad nacional y la construcción de la nación.

1) LA HERENCIA COLONIAL Y LAS LUCHAS NACIONALES Y DEMOCRATICAS.

La revolución en el Perú es un proceso peculiar y complejo. Su objetivo no es sólo la socialización de la economía y del poder sino también la culminación de un conjunto de tareas democráticas y nacionales inconclusas.

El Perú no ha vivido todavía una revolución que liquide la herencia colonial negativa. A más de 160 años de la independencia, la colonia aún vive entre nosotros. Un conjunto de rasgos de la economía, la estructura social, la cultura y la política, testimonian su supervivencia. La orientación hacia afuera de nuestra economía, la desarticulación de nuestra organización espacial; la discriminación racial y técnica; los rezagos estamentales y de casta; los componentes elitistas y oligárquico-coloniales de nuestra cultura; el

caudillismo, la prebenda, el clientelaje, la negación práctica de derechos políticos esenciales a vastos sectores de la población y la violencia política cotidiana, constituyen taras coloniales que coexisten con las injusticias propias de la sociedad burguesa y moderna.

El Perú tampoco ha resuelto aún su problema nacional. Somos una nación pluricultural en formación, como lo plantea el Amauta José Carlos Mariátegui. Desde el movimiento social y desde el Estado, el Perú ha avanzado en el proceso de formación de la nación, pero no ha culminado aún esta tarea.

Dos componentes fundamentales caracterizan el problema nacional en el Perú. Por un lado, la segregación racial, la disgregación cultural y política y la falta de identidad nacional y, por otro, nuestra situación semi colonial definida por la dependencia económica sustantiva y la independencia política formal. Son estos dos factores fundamentales los que impiden que el Perú sea una comunidad nacional y hacen que la sociedad no se sienta reconocida en el Estado y exista, según la expresión de Jorge Basadre, una separación entre el país real y el país legal.

El desarrollo capitalista, lejos de contribuir a resolver el problema nacional, que la Conquista y la Colonia redefinieron y consolidaron, ha profundizado las formas de disgregación social, técnica y política, añadiendo la semicolonialidad.

Ni la oligarquía criolla, ni la burguesía modernizante han sido clases dirigentes nacionales capaces de forjar la unidad, reconocer la pluralidad cultural del país y sentar las bases de nuestra independencia económica y política. La construcción de la nación y la forja de la democracia han sido tareas de las clases populares, particularmente en sus luchas de este siglo. En el periodo más reciente, los movimientos campesinos de las décadas del 50 y del 60 gestaron un importante proceso de democratización social y política debilitando al gamonalismo y a la oligarquía mediante las ocupaciones de tierras y las exigencias de reforma agraria. Los movimientos de los pobladores de los 50 en adelante han tenido como objetivo la eliminación de la segregación urbana.

El movimiento obrero de los 60 y los 70 desbordó la fábrica y se expandió a la sociedad para luchar por la democracia, por su organización clasista, por sus reivindicaciones concretas y la dignidad de los trabajadores. La lucha de los estudiantes, los maestros y los intelectuales han contribuido decisivamente al proceso de democratización de la escuela y de la cultura en el Perú. A ello contribuyó también el proceso velasquista, pese a sus limitaciones.

Los movimientos populares en el Perú han tenido y tienen un sentido democrático y nacional que Izquierda Unida recoge y expresa para darle una perspectiva socialista. El cumplimiento de las tareas democráticas y antiimperialistas que se derivan de la permanencia de estos antiguos y dolorosos problemas, así como de la emergencia de aquellos generados por el proceso capitalista consituye el objetivo de la transformación revolucionaria que el Perú necesita iniciar.

2) IMPERIALISMO, CLASES SOCIALES Y NACION EN EL PERU

La estructura productiva peruana está inserta en la economía mundial, pero tanto por la poca capacidad competitiva a nivel internacional, como por la escasez y poca productividad de los medios de producción que poseen el campesinado y los trabajadores independientes urbanos, la mayor parte de sus unidades de producción se encuentran en una situación de debilidad productiva que impide la acumulación de capital. Esto explica en buena parte la complejidad de la estructura de clases en el Perú y la endémica inestabilidad de algunas de ellas.

Dejando de lado los factores subjetivos y políticos, las clases no son fuertes en función de su tamaño, sino que guardan relación con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas sobre las que se asientan. La inestabilidad de la estructura de clases se debe a que las relaciones de los sectores productivos con la economía mundial, no sólo determinan variaciones en la magnitud de los ingresos de las clases sociales, sino que también influyen de manera muy marcada en el tamaño y composición de ellas mismas.

Por esa razón, las crisis internacionales del sistema capitalista impactan significativamente en el tamaño de la clase obrera y no sólo en el nivel de su ingreso. La relativa debilidad de la clase obrera en ciertas ramas, como la metalmecánica, y la mayor fuerza en otras, como en la minería, depende, entre otros factores, del mayor o menor desarrollo tecnológico de las unidades productivas y de su competitividad internacional.

Las actuales tendencias internacionales hacen más graves aún las contradicciones nacionales. La caída de los precios internacionales, el servicio de la deuda externa y el proteccionismo de los países industrializados, reducen el ingreso nacional y obligan a reducir los subsidios y gastos del Estado. Al mismo tiempo, la propia crisis pone en peligro la estabilidad de las empresas industriales y obliga a elevar la protección frente al competidor externo que presiona por introducir, a bajos precios y por contrabando, sus mercaderías no vendidas en sus mercados originales.

La inflación resulta ser la manera privilegiada de subsidiar a los empresarios en general, pues provoca una pérdida de remuneraciones reales mayor a la de la producción en general y facilita el mantenimiento e incluso la elevación de la tasa de ganancia del capital. En cambio la devaluación favorece de preferencia a los grupos que están más vinculados al mercado externo. Las medidas que usualmente recomienda el FMI han estado orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos de pago con la banca internacional y la protección de los intereses de las empresas exportadoras; éstas debían generar las divisas que el sistema financiero trasladaba a los centros financieros mundiales. Con la finalidad de facilitar el pago de la deuda externa las medidas fondomonetaristas reducen la capacidad adquisitiva del pueblo, comprimen por ese medio la demanda interna y la necesidad de importar materias primas y bienes de consumo dejando así disponibles las divisas destinadas a los acreedores. Los capitalistas orientados al abastecimiento del mercado interno que no son parte de los oligopolios industrial-financieros y que, en consecuencia, no cuentan con acceso privilegiado al crédito subsidiado ven reducirse drásticamente sus ventas y elevarse desmesuradamente sus costos financieros quedando en situaciones de extrema fragilidad si no de quiebra.

Cuando el Estado burgués es impactado por la crisis internacional, y se reduce su posibilidad de mantener el nivel anterior de gastos y subsidios, recorta aquellos que benefician a los sectores populares y trata de mantener los que necesita el sector empresarial. El Estado, conjuntamente con el capital financiero interno, protege así los intereses de la burguesía que es la clase que dirige la producción de la cual dependen ambos, y descargan sobre el pueblo las consecuencias de la crisis.

Por ello la contradicción principal de la sociedad peruana es la que enfrenta a los sectores democráticos, populares y nacionalistas con el imperialismo y sus aliados internos dentro y fuera del gobierno. Resolver la contradicción principal implica enfrentar la tradicional alianza de los gobiernos con el gran capital financiero-industrial interno y su subordinación al capital transnacional.

El antiimperialismo está así concatenado indisolublemente a la lucha democrática en camino al socialismo. Esta realidad asegura tanto la unidad de todo el pueblo peruano, incluyendo a los empresarios nacionalistas, como el aislamiento de las minorías proimperialistas beneficiarias de la dependencia y de la crisis. La lucha por la vida y por la identidad nacional se constituye en la punta de lanza de la afirmación popular, la misma que supone una ruptura con el sistema económico imperante.

3) EL ESTADO ANTIDEMOCRATICO Y LA LUCHA DE CLASES EN EL PERU

Desde los años 30, tras la gran depresión del sistema capitalista mundial, el Estado participa de una nueva manera en el proceso económico y da lugar al inicio de la llamada política macroeconómica que le asignó al Estado el rol de alentar la demanda interna mediante el gasto público, no importando ni su orientación, ni que se incurra en déficit fiscal.

En una sociedad subdesarrollada como la peruana, el Estado participa del conflicto social de una manera peculiar y tiene un rol muy activo en el manejo de la evolución cotidiana de la economía. Su participación es necesariamente más intensa.

Mientras en los países industrializados la acción del Estado era impulsora de la demanda para utilizar plenamente una capacidad productiva ya instalada y de alta productividad y competitividad internacional, en nuestro caso es necesaria, además, una actividad protectora de toda la estructura productiva sometida directa o indirectamente a la competencia de la economía mundial. La razón de esta diferencia fundamental es que la industria nacional es por lo general todavía poco desarrollada tecnológicamente y con escasa competitividad. No le basta al Estado redinamizar la estructura productiva, sino que tiene que sostenerla y expandirla, y por ese medio, sostener y expandir la estructura de clases. Por eso, el Estado está también más profundamente dentro y participando más explícitamente del conflicto social.

Debido a su escasa productividad y a su dependencia del exterior, el empresario capitalista no puede prescindir del Estado. Por lo primero necesita protección, por lo segundo, acceso a divisas, siempre escasas y, por tanto, fuertemente demandadas por diversos sectores y para diferentes fines. El Estado, depositario y administrador de dichas divisas, resulta por eso en medio del conflicto.

En sociedades capitalistas avanzadas, la revolución industrial permitió, en estos aspectos, una autonomización relativamente grande del capitalista respecto del Estado, superando la relación de mayor dependencia que existía durante la época de la construcción de los mercados nacionales y del comercio a larga distancia.

En el Perú, la burguesía no está en condiciones de ganar esa autonomía y buscará siempre la relación económica estrecha con el Estado. El Estado se ubica así, inevitablemente como intermediador directo de los flujos económicos y pieza fundamental de la asignación sectorial y social de los excedentes.

Por ello, el Estado no puede concentrarse sólo en las labores políticas generales y en la vigilancia del cumplimiento de la legislación, como pretenden los nuevos liberales nacionales. Ellos, en su búsqueda por retomar el liderazgo ideológico y político de la burguesía, intentan una transposición ideológica desde realidades y etapas del desarrollo capitalista totalmente distintas a la peruana.

Desde el punto de vista popular, la dificultad para conseguir trabajo asalariado, hace que un componente fundamental de su reivindicación económica en su lucha por la vida sea el combate en cuanto poblador. Busca así lograr, a través del Estado, aquello que como trabajador no consigue.

La multiplicidad de sus frentes de lucha y los de su familia hacen que la conciencia popular tenga un profundo carácter clasista, pero en un sentido más complejo, democrático y nacional, que el resultante de una prolongada experiencia fabril bajo el capitalismo.

Como la intervención del Estado es permanente y el nivel de salarios es un asunto de política económica estatal y no sólo de manejo empresarial privado, el trabajador asalariado no puede concentrar su atención en la situación de la empresa en el momento de definir su pliego de reclamos.

Es por esto que el "pliego de reclamos salarial" no es sino el componente más organizado y con más trayectoria del "pliego de reclamos popular", que se esgrime, no a un empresario, ni a la clase capitalista como tal, sino a todos los sectores sociales de ingresos altos y al capital extranjero por intermedio del Estado.

Dada la precariedad de la vida popular, la expectativa principal frente al Estado se ubica en el plano económico, ya que la política económica y social que lleve a cabo el gobierno de turno, es la principal fuente de alivio o frustración.

El antiestatismo liberal nunca podrá hacer carne en los sectores populares, a pesar de la manifiesta complicidad estatal-burguesa.

El pueblo no puede, por razones objetivas, dejar de movilizarse y exigirle al Estado políticas económicas y sociales que le favorezcan. Su posibilidad de autonomizarse de él económicamente es imposible desde los niveles de productividad y aspiraciones de consumo predominantes.

La burguesía tampoco puede desprenderse de los beneficios del Estado, porque su

protección de la competencia internacional, es la condición básica para sobrevivir como empresarios industriales.

Es principalmente la base productiva actual, lo que no permite elevar los ingresos fiscales. Y todos los sectores sociales demandan subsidios y gastos. En este contexto, la evasión tributaria y la corrupción, pública y privada, sobre todo en el campo de las divisas, es claramente un boicot contra la democracia y el rol protector, de las empresas y del pueblo, por parte del Estado.

El antiestatismo, en consecuencia, no es una postura pro empresarial y menos aún pro-popular; será siempre un planteamiento ideológico sin posibilidad de encarnarse en la vida social a plenitud.

En una perspectiva programática de izquierda, el rol del Estado no puede definirse en los términos liberales, colocándolo al margen del proceso económico cotidiano. Su rol es central en el manejo macro y microeconómico. Por eso la planificación obligatoria es una necesidad histórica derivada de la estructura productiva, y lo es incluso en un proceso capitalista de desarrollo.

En un contexto de democracia, la planificación tendrá que conjugar los requerimientos de un desarrollo social armónico y la correlación de fuerzas entre grupos sociales, entre regiones, entre ramas productivas, y poner en evidencia la real contorniura de la sociedad y de sus intereses parciales.

4) EL FRACASO DE LA ACUMULACION CAPITALISTA DEPENDIENTE.

El último cuarto de siglo ha puesto en evidencia un contradictorio proceso de subdesarrollo en la sociedad peruana, que denuncia la incapacidad de la gran burguesía asociada al capital transnacional para sacar adelante el país, incluso en sus propios términos.

Con el desarrollo dependiente de la industria nacional, la contradicción capital-trabajo se traduce en una permanente elevación de la participación de la masa de ganancia en el ingreso nacional y, en consecuencia, en un deterioro sistemático de los salarios. Hoy, los sueldos y salarios promedio tienen una capacidad adquisitiva menor que la de hace treinta años, al comienzo de la última etapa de la industrialización peruana.

La acumulación de capital y la generación de empleo es cada vez menor a pesar de que los excedentes disponibles para ser invertidos en nuevas instalaciones y capacidades productivas han crecido sistemáticamente.

El fracaso de la acumulación de capital en el Perú contemporáneo tiene causas estructurales previas a la crisis mundial y se agrava con las políticas del capital trasnacional y la actividad rentista e improductiva del gran capital monopólico interno.

El tipo de acumulación previo a la industrialización reciente, se asentó en la generación de excedentes en base a la exportación minera y agroindustrial que aplicaba tecnología moderna a recursos naturales de gran calidad. Esto aseguraba una renta diferencial que permitía el abastecimiento fácil de bienes de consumo diversificados (mayoritariamente importados) a los reducidos sectores medios y altos de las ciudades y de los insumos y bienes de capital a la pequeña y protegida industria nacional, además de las importaciones para la defensa.

El poder político estaba dominado por el gran capital oligárquico en alianza con las grandes empresas extranjeras e imponía políticas en favor de los exportadores y frenaba las exigencias de los débiles sectores promotores de la industrialización nacional y de la reforma agraria. Las grandes utilidades permitieron incluso la formación de verdaderas empresas transnacionales en el exterior que tuvieron su fuente original de excedentes en el Perú. Los casos de la Cerro Corp., de la Grace, y de la Marcona Mining Co. grafican claramente esta situación.

La urbanización, la emergencia de nuevos sectores medios profesionales y de nuevos partidos políticos en los años cincuenta y sesenta tras la frustración bustamantista, dieron lugar a renovadas presiones para industrializar la economía nacional. Pero las pautas ya establecidas en otros países de América Latina que se habían adelantado en este proceso, sentaron los criterios para el proceso peruano.

En un comienzo, las grandes inversiones mineras y el crecimiento de las exportaciones de harina de pescado permitieron un alto nivel de importaciones que dio lugar a una política nacional de prematura diversificación de modelos y marcas de productos ensamblados en el país, lo que favoreció el mayor aumento de las importaciones atadas a proveedores externos de tecnologías e insumos y postergó todo lo posible la integración nacional de la producción.

El capital extranjero industrial apoyaba e impulsaba esta política en toda América Latina, con el fin de elevar al máximo las importaciones de insumos, piezas y partes desde las casas matrices y otras filiales. Sólo decididas políticas estatales de industrialización nacional revertieron parcialmente esta tendencia.

La "dólar-adicción" de la estructura productiva peruana fue y es cultivada por el capital extranjero, del mismo modo que lo es la exportación de materias primas sin procesar. Actualmente, esta situación está internalizada porque es la propia tecnología incorporada intrínsecamente en el aparato productivo existente en el país la que presiona por dólares para poder operar. Los déficits en la balanza comercial se convirtieron así en consecuencia de una estructura productiva difícil de cambiar.

Esta industria desarticulada del resto de sectores productivos nacionales gracias a la disponibilidad de divisas para importar, mantuvo, tras la protección y los subsidios del Estado que la hacían económicamente viable, bajos niveles de productividad y de calidad en el abastecimiento interno. La lógica capitalista de máxima ganancia propiciaba la elevación de las importaciones, exigía mayor protección y subsidios del Estado y no se guiaba por la competitividad, la innovación tecnológica propia y la búsqueda de mercados más amplios.

En esta situación, la prematura diversificación, los rápidos cambios en las pautas importadas de consumo y la resistencia de las empresas extranjeras a cambiar su lógica importadora, hicieron que las escalas de producción se mantuvieran reducidas y que fuera imposible generar un sector productor de piezas, partes y bienes de capital suficientemente dinámico y que generaran nuevas oportunidades de inversión rentable. La fuga de capitales y los usos improductivos de las ganancias fueron aumentando y reproduciendo de una manera más dañina que en el pasado, la estructura productiva industrial basada en la producción y ensamblaje de bienes de consumo.

En el sector primario de la economía existían posibilidades de inversión rentable en la refinación y el mayor procesamiento de recursos naturales pero, tal inversión era resistida por el capital extranjero que prefería retener para sí y en sus casas matrices el aumento del valor agregado. De ese modo, el modelo capitalista dependiente en el Perú estimulaba a la vez la importación creciente y la reducción del valor agregado de las exportaciones.

La estructura productiva del país quedó así funcional al capital transnacional, lo que hizo que la economía peruana fuera muy frágil frente a las oscilaciones de los precios internacionales, e incapaz de aprovechar a plenitud los aumentos de la demanda interna. Cada aumento en el consumo, se traducía de inmediato en una elevación de las importaciones y daba lugar a un estrangulamiento externo, el que a su vez, desincentivaba más la inversión y estimulaba la salida de las cada vez más demandadas y menos accesibles divisas.

La crisis mundial y su impacto sobre esta débil y oscilante estructura económica han agravado aún más los problemas de la acumulación de capital en el Perú. El endeudamiento externo se transformó durante los últimos diez años en una nueva restricción externa al crecimiento. Las escasas exportaciones perdían valor por la caída de los precios internacionales y la proporción de ellas que había que pagar a los acreedores externos aumentaba. La elevación de la tasa de interés internacional incrementó aún más esta proporción haciendo definitivamente impagable la deuda y obligando a fuertes retracciones en el nivel de actividad productiva nacional. De ese modo, sobre esta dinámica estructural, el deterioro de los términos de intercambio, y más recientemente, el endeudamiento externo han profundizado las dificultades para la acumulación de capital.

Las políticas recesivas, implementadas por la escasez de dólares y el pago de la deuda externa, aumentaron aún más las garantías. Pero, con una demanda decreciente, el interés por una inversión capitalista disminuyó aún más y se produjo una fuerte orientación de estas utilidades por comprar los escasísimos dólares existentes, incluidos los provenientes del narcotráfico y atesorarlos dentro del país o ponerlos a buen recaudo en los bancos extranjeros o en inversiones fuera del país. Sumado a esto la fuga de capitales al exterior por sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones ó simplemente de manera directa, aumentó hasta límites extremos la salida de recursos nacionales descapitalizándose el país y agudizándose la escasez de divisas, la caída de la inversión, del empleo y de las remuneraciones.

De ese modo, a las crisis derivadas de la deformación estructural se añadieron la crisis mundial y las políticas fondomonetaristas que profundizaron la crisis de la acumulación en el Perú.

En este contexto de crisis estructural, el dominio de una lógica de acumulación basada en la maximización del beneficio individual, sin consideración alguna por los intereses populares y nacionales, acelera la descapitalización y la destrucción de la economía nacional. Incluso el gran capital monopólico interno ha establecido bases de acumulación productiva y rentista fuera del Perú y desangra al país aprovechando todas las oportunidades que se le ofrecen.

El crédito interno subsidiado es utilizado cada vez más para adquirir moneda extranjera y acumular en el exterior agravando la situación económica y política nacional y alimentando un círculo vicioso descapitalizador y generador de violencia y caos.

El Estado actual, por estar profundamente comprometido con el gran capital, se somete

a sus exigencias, es incapaz de imponer los intereses nacionales por sobre los particulares, y los populares por sobre los del gran capital monopólico y de impedir la larga destrucción de la economía nacional.

Por eso, las relaciones sociales en el capitalismo dependiente existentes en el país, son incapaces de generar acumulación interna y de hacer crecer el empleo y los salarios, lo que hace del capitalismo peruano un fracaso total en el plano económico.

Frente a esa situación, los trabajadores organizados asumen la responsabilidad principal en la dirección de una alternativa popular y nacional. Su rol de vanguardia popular los obliga a liderar la lucha nacionalista, a tomar bajo su responsabilidad la fiscalización de los intereses nacionales, a garantizar la inversión productiva de los resultados de su trabajo, a garantizar el abastecimiento de los artículos de primera necesidad a todo el pueblo, a contribuir al desarrollo de una industria de bienes de capital y de procesamiento de materias primas nacionales y a desarrollar el máximo de iniciativa y creatividad para superar los complejos problemas que confronta el país. En suma, los trabajadores son pieza fundamental y clave de un proyecto alternativo al capitalismo dependiente.

5) LA CONTRADICCIÓN CAMPO-CIUDAD

La caótica urbanización, el estancamiento productivo agrario, la sistemática imposición de pautas de consumo importados, el sesgo urbano de la política estatal agrícola y el abaratamiento de alimentos importados de gran demanda popular, han agravado enormemente la contradicción entre el campo y la ciudad.

Mientras la productividad agrícola mundial se ha elevado enormemente, la del campo peruano ha quedado rezagada. Si todavía sobrevive el campesino es porque ha defendido la comunidad y a partir de ella, desde una racionalidad propia mantiene un nivel de vida extremadamente pobre y una cultura enraizada en la tierra. La reforma agraria terminó con el injusto latifundio, pero fue interrumpida y por lo tanto fue insuficiente para completar la reforma de la propiedad de la tierra y dinamizar el agro nacional con el necesario soporte técnico y financiero.

La dependencia alimentaria es uno de los problemas claves a resolver por cualquier gobierno que quiera cambiar el país en beneficio de los sectores populares. Su solución requiere ser enfrentada en un sólido esfuerzo unitario entre los trabajadores de la ciudad y del campo.

Los oligopolios controlan, con la anuencia del Estado, ramas importantes de la agroindustria y fomentan la extensión de pautas de consumo basadas en insumos importados. Su enorme poder comercial y político, se ha visto fortalecido con la reducción de los precios internacionales de los insumos importados, lo que les da mayor capacidad de atenuar la contradicción campo-ciudad por medio de alimentos baratos que, a su vez, abaratan el costo de la mano de obra para el capital sin necesidad de aumentar la productividad de las empresas rurales y urbanas productoras de bienes salario.

El pueblo en las ciudades exige alimentos a un precio que esté de acuerdo con su capacidad económica y los empresarios presionan al Estado para que proporcione alimentos baratos para reducir costos salariales. El agro nacional, sobre todo el alto andino, es cada vez menos capaz de abastecer a la ciudad en la cantidad y precios reclamados.

La estructura de clases del país, ha llevado a que las grandes ciudades, en especial Lima Metropolitana, articulen a su favor la economía regional y nacional. Pero en las últimas dos décadas este rol se está redefiniendo por la lucha popular y la gestación de nuevos canales de representación política, como son los frentes de defensa, el fortalecimiento de los gobiernos locales, las aspiraciones descentralistas y el mandato constitucional de regionalizar el país.

Nacionalizar los oligopolios que controlan la agroindustria, romper con los hábitos de consumo importado y reemplazarlos con productos nativos sigue siendo un imperativo en la actualidad. Relacionar estrechamente el campo andino con la ciudad serrana, fomentar el agro en la selva y capitalizar y aumentar la productividad del agro, sobre todo en las cooperativas y parcelas así como en la pequeña empresa agroindustrial y urbana en todas las regiones e impulsar el desarrollo de ciudades intermedias, son también objetivos estratégicos destinados a minimizar la contradicción campo-ciudad.

6) LA CONCENTRACIÓN DE CAPITAL Y EL EMPLEO PRODUCTIVO

El país tiene como objetivo alcanzar el pleno empleo. No se trata sólo de un objetivo deseable o de un problema de justicia social, sino que es la herramienta básica para poner en movimiento toda la capacidad potencial productiva del país y de redefinir la orientación de la demanda.

El problema del empleo productivo es quizá el fundamental de la economía peruana y resulta evidente que toda la juventud actual y futura no puede ser absorbida por el sistema fabril de alta intensidad de capital, por mucha inversión que se realice.

No basta por lo tanto, revertir la tendencia declinante de la inversión en el Perú, es igualmente esencial para asegurar empleo a las futuras generaciones, definir políticas específicas orientadas al pleno empleo abordando aspectos de la composición de la inversión, tecnología, localización regional y regímenes de propiedad prioritarios.

La incorporación de aquellas tecnologías avanzadas que utilizan poca mano de obra directa, debe ser realizada en forma programada, de manera que ese proceso no reproduzca las condiciones nocivas de la tradicional transferencia tecnológica. Estos avances del conocimiento internacional en determinadas condiciones pueden contribuir a la generación de empleo productivo indirecto. Aunque es evidente que no pueden dominar el conjunto de la economía.

Para IU, la promoción y el apoyo técnico y financiero a la pequeña empresa, el rescate de las formas asociativas ancestrales, el autogobierno de las organizaciones de base, y los programas de inversión productiva que generen empleo masivo a cargo del Gobierno Central, de los gobiernos regionales y de las municipalidades serán ingredientes fundamentales de la alternativa estratégica popular para resolver la contradicción entre la oferta y la demanda de trabajo. La combinación de la planificación en los núcleos fundamentales de la economía con amplios campos de libertad para la iniciativa empresarial popular permitirán generar un todo armónico y evitar las contradicciones entre pequeña y gran empresa y entre empresa pública y privada.

Esta avenida de progreso no es sencilla. A las dificultades estructurales, señaladas a lo largo de este documento, se suma la falta de una educación para el trabajo, la solidaridad y el compromiso con su medio, y la concentración de privilegios económicos en los grandes grupos financiero-industriales permanentemente protegidos y subsidiados por el Estado.

La juventud lucha por superar las trabas que le impone el sistema y la vieja cultura de sumisión servil que vieron, y en muchos casos aún ven, sufrir a sus padres. No encuentra una solución a sus problemas. No tiene trabajo, y cuando lo consigue las injustas e impersonales relaciones sociales de la industria moderna capitalista, la oprime y explota, sin darle mayor oportunidad de progreso. Configura así una situación sin salida satisfactoria y llena de frustración y resentimiento.

Los rezagos de la vieja cultura colonial no terminan de desaparecer y la educación, la supuesta gran herramienta de emancipación individual, no logra separar del todo a las nuevas generaciones de esos rezagos.

La aguda desocupación ha llevado a que un fuerte sector de la población, principalmente compuesto por mujeres, busque resolver su problema de subsistencia mediante múltiples mecanismos que se basan en la auto-sobre-explotación, y en burlar el pago de impuestos, los beneficios sociales y los trámites formales legales. Esta situación no es exclusiva del Perú, y se le conoce genéricamente como el fenómeno de la informalidad.

Los teóricos del neoliberalismo pretenden sustentar que en esa iniciativa individual está la salida a la crisis, explican el fenómeno de la informalidad como una respuesta a los engorrosos trámites burocráticos para formalizar una actividad empresarial, olvidándose que el fenómeno de la "informalidad" es justamente resultado de la crisis y que por cada uno que resulta empresario en ascenso, cientos van dando tumbos de trabajo en trabajo, de una actividad a otra. La informalidad no resuelve los problemas básicos de las mayorías. Por eso suben rápidamente los índices de morbilidad, desnutrición, mortalidad, y delincuencia, como expresiones estadísticas de una crisis más profunda.

La propuesta programática de IU toma toda la realidad, y la realidad de todos los peruanos en consideración. No sólo la de los que triunfan a costa de la superexplotación. Sus lineamientos políticos principales son los siguientes;

a.- El desarrollo de la iniciativa empresarial popular estará estrechamente vinculada a la garantía del acceso gratuito a la salud y a una educación de calidad, así como a la satisfacción de otras necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestido y transporte.

b.- La política de consumo popular será también, en este contexto programático, una política de estímulo a la inversión en pequeña escala que, como señalamos arriba, tiene que ser complementada con apoyo crediticio, técnico, administrativo y de protección del mercado.

c.- La política de fomento a la inversión en pequeña escala descansará principalmente en una política de ahorro popular masivo que no se realizará a costa de la supervivencia familiar pues se basará, a su vez, en la protección del consumo de los bienes y servicios básicos, en el aliento e incentivo por consumir lo nuestro, en el recorte del consumo superfluo

y extranjerizante y en la conversión de mano de obra en bienes de capital.

d.- La participación activa y organizada de los trabajadores en la actual estructura productiva nacional y en las decisiones económicas y políticas de distinto nivel serán un camino fundamental para lograr esa igualdad de oportunidades en la generación de iniciativas productivas.

7) DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y NACIONALIZACION DE LA ECONOMIA

El impacto de la crisis mundial y de la revolución tecnológica en curso presionan a una reorientación de la estructura sectorial de la economía. Así, a los golpes sobre la actual estructura productiva provenientes de los bajos precios de nuestras exportaciones y del alto servicio de la deuda externa, hay que añadir aquellos que empiezan a sentirse originados en la revolución tecnológica.

Esta revolución acelera la obsolescencia de la estructura productiva nacional y obliga a reevaluar la base material sobre la que descansa un proyecto alternativo de sociedad y de Estado.

Los cambios internacionales en el campo de la productividad y de la innovación de productos, abaratan las importaciones y mejoran calidad y diversidad, generándose una gran presión por desnacionalizar la economía. El problema es similar al registrado estos años con el abaratamiento de los productos alimenticios importados y la agudización de la contradicción campo-ciudad.

Sin embargo, estas tendencias se acompañan de una creciente transnacionalización y fragmentación de la producción y de una reconcentración de las etapas de punta en las economías industrializadas.

Una nueva división internacional del trabajo está en curso y en estas circunstancias será difícil un proyecto de nacionalización económica que se margine de la economía mundial.

A la condicionalidad de las políticas económicas en el plano comercial, se ha añadido la derivada de los flujos financieros. A esto se ha sumado, la condicionalidad que surge como consecuencia de los flujos de información sobre pautas de consumo, y sobre los avances tecnológicos y científicos (que determinan los tipos de demanda y, en gran medida, la competitividad internacional y el nivel de vida de los países).

En este contexto de transnacionalización de la producción, de gran porosidad comercial y de creciente interacción financiera, cultural, científica y tecnológica, el concepto y la propuesta de nacionalización tienen que ir adquiriendo un sentido acorde con el mundo en el que nos toca vivir.

La naturaleza nacional de la propiedad es, indudablemente, un factor fundamental para establecer una política económica nacionalista, pero eso no significa la marginación de formas de asociación que posibiliten recibir la colaboración, solidaridad y apoyo de pueblos hermanos y de realizar convenios con el capital internacional que sean favorables para el país. Se requiere además conjugar adecuadamente la protección al mercado interno con los requerimientos del comercio internacional.

El carácter nacional de una economía está cada vez más, basado en el control soberano de sus recursos y de las palancas fundamentales del proceso de acumulación. Pero no se reduce a esto, incluye también la capacidad nacional de cambiar permanentemente, introduciendo los contenidos de su propia experiencia y absorbiendo las experiencias de todos. Es decir, responder, desde una perspectiva nacional y popular, con celeridad a los cambios internacionales y al mismo tiempo, con orientación propia, desarrollar nuevas capacidades científicas, tecnológicas, productivas y culturales en general.

Las medidas de nacionalización, destinadas a afectar flujos comerciales o financieros, a autonomizar la política económica, a obtener la propiedad de instalaciones productivas, a retener personal científico o técnico, a reordenar la estructura sectorial, a defender los recursos naturales, etc. tienen que ser vistas con criterios de propiedad de reservas internacionales y articularse con un proyecto cultural, científico y tecnológico nacional.

La desnacionalización cultural impide absorber los avances internacionales sin perder la propia personalidad; induce a imitar los criterios foráneos para la toma de decisiones; destruye las experiencias nacionales de investigación científica y técnica; importa estilos de comportamiento ético ajenos a la cohesión nacional y promueve una educación alejada de la propia historia y naturaleza, incapaz de forjar una nueva cultura teñida por la anterior.

Por eso, la presencia popular en todas las instancias de decisión y de aprendizaje y la conversión del Perú en un territorio-escuela son base del programa inmediato de gobierno de IU.

8.- LA CUESTION DE LA IDENTIDAD Y LA CONSTRUCCION DE LA NACION

En el Perú el encuentro desigual entre las culturas autóctonas y la cultura española en el siglo XVI, y el ejercicio de la dominación occidental han determinado una escala de valores que se asienta y es producto de esa subordinación. El racismo que se instaura a partir de ese entonces, la dependencia de un sistema extranjero y la organización colonial de la sociedad peruana, han determinado una idiosincrasia cultural que reproduce aquellas características a las que se han anadido las opresiones por clase y género entre otras.

Así, la pluriculturalidad preexistente fue usada por la cultura dominante para agudizar el desencuentro social, propiciando una fragmentación que nutre y refuerza al mismo tiempo la herencia colonial que el paso de la colonia a la república no alteró sustancialmente.

El sistema capitalista no supera esas diferencias, sino las acentúa pues se sirvió de la atomización de los dominados y explotados para instaurar un capitalismo expoliador, parasitario y dependiente, que impuso el autoritarismo abierto aunque mediatizado por el racismo.

Por ello, construir nación el día de hoy significa desarrollar un proyecto político socialista que elimine las bases de aquellas múltiples opresiones e impulse una nueva cultura que respete la pluriculturalidad y promueva aquellos elementos de la cultura nacional que nos unifican y fortalecen como nación.

Para el efecto será preciso construir espacios de solidaridad y cooperación en la economía, la política y la cultura combinando los logros de la cultura universal contemporánea con aquellos provenientes de las comunidades campesinas y nativas, de las experiencias de trabajo y lucha de los asalariados mineros e industriales; de la creatividad de los trabajadores y empresarios nacionales; de las estrategias de sobrevivencia de los pobladores barriales y del talentoso y variado aporte de sus intelectuales.

El agente creador de esa nueva cultura será el mismo pueblo en libertad que se organiza para construir y dirigir, él mismo, los destinos del país despojado de las ataduras de opresión y desigualdad que han limitado hasta ahora su protagonismo como edificador de la unidad.

EL - LOS DESARROLLOS PROGRAMÁTICOS CON EL
GOBIERNO LOCAL

III.- LOS DESLINDES PROGRAMATICOS CON EL GOBIERNO ACTUAL

A.-Diferentes concepciones programáticas

Las diferencias de concepción programática con el gobierno son profundas y abarcan casi todos los campos. Hace ya muchos años el Amauta José Carlos Mariátegui deslindó política, teórica y programáticamente con el APRA, señalando su naturaleza de clase y las limitaciones que luego se pusieron en evidencia. Los ángulos de deslinde fueron múltiples en los 60 años posteriores y nuevos enfoques han servido en los últimos años para enriquecerlos. Sería largo recorrer las etapas de esa crítica.

Hoy que el APRA está en el gobierno, es necesario reafirmar ese deslinde programático pero poniendo el acento en los planteamientos formulados en los discursos del Presidente García, aunque no hayan sido aplicados, y en lo actuado durante los tres años recientes. No es posible comparar programas conocidos por cuanto el elaborado por CONAPLAN no fue aceptado como guía de la acción gubernativa.

1.- EN CUANTO A LA DEMOCRACIA

El concepto de DEMOCRACIA es diferente en diversos aspectos, entre ellos, el relativo a la participación popular. Esta ausencia de participación popular democráticamente organizada y autónoma es la causa fundamental del fracaso del gobierno aprista. A pesar de haber incluido, retórica pero correctamente, bajo su definición de democracia, la satisfacción de las necesidades mayoritarias, cosa que la derecha en el país no hace, en

ningún momento puso el acento en la participación del pueblo y en todas las formas de autogobierno y de organización autónoma y democrática del pueblo.

2.- En cuanto al Antimperialismo.

El concepto de ANTIMPERIALISMO es diferente del que profesa I.U. porque no considera lo fundamental: la transformación interna del país. En esto se reedita el debate Haya de la Torre-Mariátegui pues éste consideraba esencial a la posición antimperialista, la transformación de la sociedad nacional.

El enfrentamiento con el FMI y otros acreedores por parte del gobierno, aparte del grado en el que se haya efectivamente cumplido, no es coincidente con el de I.U. porque no ha sido parte de, ni ha servido a un proyecto de autonomía nacional del imperialismo.

Sin proyecto revolucionario no hay antimperialismo.

3.-EN CUANTO AL ESTADO

Debido a lo anterior, la concepción de García sobre la organización y rol del propio ESTADO es también diferente de la que postula I.U.. Durante el gobierno actual, el famoso "estado antimperialista" de la doctrina originaria del aprismo se transformó en un "estado regulador" sin ninguna planificación ni control sobre la evolución de la economía y cuyas atribuciones eran incluso menores a las que la Constitución de la República señala. Esa concepción ha sido un factor fundamental del desgobierno actual.

Para García, el Estado peruano debía extender sus servicios a todos los rincones del Perú, lo cual es necesario sin duda alguna pero, para I.U., extender los servicios de este Estado, con su organización y sus prioridades es insuficiente e ineficiente, como es experiencia diaria del pueblo.

Para I.U. el Estado debe ser democratizado desde sus bases y en su organización global para que no sólo recoja efectivamente las demandas populares y sirva al pueblo y no a los grupos de poder económico y político y al imperialismo, sino para garantizar que el propio pueblo sea quien controle su destino y solucione los problemas que confronta diariamente en la satisfacción de sus necesidades y en el empleo.

4.-EN CUANTO A LAS CLASES SOCIALES

Para García, los trabajadores organizados son parte de las clases privilegiadas del Perú y no parte de los que sufren la opresión y la explotación. Además, en la perspectiva del gobierno actual, los trabajadores no son necesarios ni para determinar las políticas económicas, ni para ponerlas en práctica.

Para I.U., por el contrario, los trabajadores organizados son piezas fundamentales del pueblo explotado y oprimido y parte indispensable de la dirección del país.

5.-EN CUANTO A LA JUSTICIA Y LA PAZ

La concepción oficial sobre la PAZ es también diametralmente opuesta a la que postula I.U..

El gobierno actual mantiene la misma política contra la violencia terrorista que el gobierno de Belaúnde: unilateralismo militarista, ausencia de una política que establezca la justicia y el desarrollo y evasión de responsabilidades políticas en la lucha contra la violencia, venga de donde venga.

I.U., por el contrario, pone la justicia por delante, confía en las organizaciones populares autónomas y democráticamente organizadas para derrotar los autoritarismos de todo tipo y asume la responsabilidad política que tan complejo problema exige en un país con tantas desigualdades y discriminaciones, miseria y falta de oportunidades.

B.- Crítica a la gestión del gobierno de García

Respecto de la gestión misma del gobierno de García, la posición de I.U. ha sido manifestada múltiples veces cuando se ha tratado de defender al pueblo y la soberanía nacional.

En primer lugar, es necesario señalar que no podemos confrontar las propuestas de nuestro Plan de Gobierno con las de ese partido, por cuanto el APRA no alcanzó a formular una propuesta consensual, debido a la existencia de múltiples tendencias encontradas al interior del mismo. Son conocidas las posiciones claramente proimperialistas existentes así como las propuestas para la creación de una burguesía nacional e incluso otras minoritarias que proponen el establecimiento de un Estado Democrático y Popular. El Presidente García pretendió resolver el problema aprovechándose de él para dividir y

reinar dentro de su propio partido, monopolizando decisiones de todo nivel e importancia, radicalizando el discurso y retrocediendo en medidas importantes anunciadas o iniciadas. Las rivalidades dentro del APRA han tenido un gran costo para el Perú pues han paralizado políticas y decisiones necesarias, han dado lugar a giros programáticos y a improvisaciones fatales, han impedido toda coordinación y permanencia de políticas y han transformado el Estado en un campo de batalla partidario.

García ha hablado múltiples veces de una revolución antiimperialista, democrática y popular pero ni siquiera ha logrado iniciar la indispensable política de transformaciones estructurales capaces de superar las restricciones al desarrollo de la economía peruana. Toda iniciativa importante ha sido frenada antes de concluir.

1.- EL GOBIERNO APRISTA Y LOS SECTORES POPULARES

El gobierno de García fracasa porque no tiene, ni genera, una base social disciplinada, y democráticamente organizada que contribuya con su iniciativa y entrega al desarrollo nacional. El desgobierno, el movimiento pendular y errático, la incapacidad de transformar la institucionalidad antidemocrática existente y de sancionar la corrupción se deben en primer lugar a la carencia de organización en el seno del pueblo.

El concepto de democracia social que el gobierno sustenta es restrictivo e inconsecuentemente aplicado. García insistió en que democracia significaba alimentación, salud, educación para los marginados. Sin embargo, la crisis ha puesto en evidencia que estos no han sido protegidos y que, por el contrario, son los más golpeados por la política económica del gobierno. El autoritarismo, el engaño y el maltrato a los trabajadores ha sido la norma del gobierno granjeándose la enemistad de crecientes sectores populares y medios, y también empresariales, aún antes de iniciarse la crisis económica de 1988.

El gobierno aprista nació sin ligazón directa con organizaciones laborales, campesinas, poblacionales o empresariales significativas. En vez de convocar a la participación democrática y autónoma de las existentes y contribuir a la formación de nuevas, excluyó de todo diálogo a las organizaciones más representativas del pueblo, y concentró su esfuerzo en la concertación con un pequeño grupo de los más grandes y poderosos empresarios financiero-industriales del país después de haber criticado a los sectores sociales cuyos ingresos estaban ubicados en el 25% superior de la distribución de ingresos del país. Al mismo tiempo, acusaba de privilegiados a los trabajadores asalariados que habían logrado conquistar y defender ciertos niveles de organización y unidad.

En el campo, el gobierno actúa al margen de las organizaciones campesinas, ha despreciado el Acuerdo Nacional Agrario y ha terminado abandonando las ideas e iniciativas originales en favor del desarrollo rural andino concentrando exclusivamente el esfuerzo en favorecer a las organizaciones de agricultores modernos más necesarios para abastecer las grandes ciudades con productos de consumo masivo. La comunidad campesina sigue postergada pues los "rimanacuy" y el "crédito cero" no se transformaron en ningún fortalecimiento comunero nacional.

En la ciudad, los trabajadores siguen marginados de las decisiones de política en el gobierno y de la gestión y propiedad de las empresas ratificándose así el desmantelamiento de la institucionalidad comunera iniciado por Morales Bermudez y continuado por AP-PPC.

Ninguna concertación digna de consideración ha sido siquiera intentada habiendo, más bien, desprestigiado ante los trabajadores asalariados tal fórmula de diálogo.

El empleo ha sido cada vez más precario debido a la violación de la ley de estabilidad laboral por medio de PROEM y ha sido utilizado para debilitar las organizaciones sindicales de las empresas más importantes del sector privado.

Las cooperativas de producción, empresas autogestionarias y administradas por los trabajadores no han recibido apoyo alguno dejando de lado la vieja aspiración cooperativista del aprismo.

El ejecutivo inició la estatización del sistema financiero afectando los intereses de los grupos financiero-industriales que se aprovechan del crédito formal subsidiado y racionado. Sin embargo, el proceso se entrampó en una serie de marchas y contramarchas que todavía no acaban. Además, dicha propuesta de estatización no estaba incorporada en un proyecto de transformación del país, no incorporaba la participación democrática del pueblo en el sistema y no tomaba en cuenta la presencia de los trabajadores del sector. La improvisación del Ejecutivo, la subordinación de la propuesta a fines políticos dentro del APRA y la falta de convicción reformista del partido de gobierno convirtieron el proceso de reforma del sistema financiero en una excelente justificación para la reunificación de la derecha peruana.

En otros campos, las nacionalizaciones han sido desvinculadas de planes y políticas de desarrollo alternativas, como ha sido el caso de la Belco, sirviendo más bien a objetivos políticos inmediatistas. Hoy por eso, las medidas nacionalistas se desprestigian al haber

aumentado el desmanejo en el sector petrolero, su descapitalización y quiebra, poniendo la política energética en manos del capital extranjero, y más específicamente, por falta de un debate nacional serio, en las de la Shell.

En general, hoy el pueblo no es más respetado en sus derechos, en su dignidad, en su aspiración de justicia que en el pasado. La corrupción, que favorece a los poderosos, castiga al pueblo y la delincuencia sigue creciendo sin remedio y, muchas veces con la complicidad y hasta con la participación directa, de los encargados por el país de combatirla. La sanción brilla por su ausencia mientras el pueblo sufre el desamparo por el gobierno y se desconfía de toda iniciativa de protección que sea democrática y autónoma.

Por todo lo señalado, y por muchos otros aspectos de la relación del gobierno con el pueblo que sería largo pormenorizar, no podemos calificar al gobierno actual ni siquiera como reformista.

2.- LA REACTIVACION ECONOMICA Y LOS TRABAJADORES

El gobierno aprista ofreció poner por delante los intereses del pueblo y del Perú postergando el pago de la deuda externa, reduciendo la salida de ganancias de las grandes empresas extranjeras y reduciendo gastos postergables en divisas. Nos parece un avance la decisión unilateral de reducir el pago de la deuda externa a un porcentaje de las exportaciones así como la efectiva reducción del pago a pesar de que el monto ha sido muy superior al 10% anunciado. Sin embargo, los pagos no realizados y gran parte de las reservas perdidas desde fines de 1986 han servido para el pago de la deuda, para alimentar un exceso de importaciones suntuarias e innecesarias que no han servido al crecimiento del empleo y la producción, para el envío de ganancias al exterior y para el pago de servicios de dudosa calidad que deben someterse a investigación. Al no iniciarse ninguna transformación en la estructura productiva de la economía la dependencia se mantuvo inalterada.

La reactivación por dos años de la misma estructura industrial que el propio García criticó los primeros meses de gobierno profundizó, como era previsible, los vicios de un aparato productivo creado y desarrollado en el marco del modelo capitalista dependiente y "dolaradicto". Por ello, cuando se agotaron las reservas, su crecimiento se estranguló como tantas veces en el pasado.

La política del presidente García durante la primer mitad de su gobierno consistió en aumentar la demanda sin ningún freno al consumo suntuario e importado. Derrochó así las escasas reservas generadas con el sacrificio del pueblo, abaratando el lujo y la importación innecesaria.

El tercer año, ya sin reservas disponibles, con una economía exhausta y sin espacio social ni respaldo político para avanzar, la retórica oficial propone la imprescindible selectividad en el consumo y la necesidad de promover la austeridad de los sectores de altos ingresos que nosotros planteamos como condición para bajar la inflación y asegurar el acceso del pueblo a los bienes indispensables para vivir dignamente. Pero, una vez más, tal selectividad quedó en el discurso y todos los trabajadores sin excepción están sufriendo la peor crisis de su historia mientras especuladores financieros y comerciales vuelven a aumentar sus ganancias, contrabandistas aumentan en gigantesca escala su negocio ante la permisividad cómplice del Estado peruano y sin sanción de ninguna clase y el gran capital monopólico descapitaliza el país profundizando su larga crisis.

La evolución de las remuneraciones de los trabajadores ha dado un drástico giro negativo desde fines de 1987 como consecuencia de la incapacidad del gobierno de cambiar el estilo de crecimiento de la economía y de la aplicación posterior de políticas de claro corte fondomonetarista. La caída de la capacidad adquisitiva de los obreros y empleados del sector privado, de los profesores y profesionales, y de los funcionarios públicos ha sido enorme. Varios de estos grupos tenían en la segunda quincena de julio de 1988 el menor ingreso de la historia nacional.

3.-LA DESPREOCUPACION POR EL FUTURO DE LA ECONOMIA NACIONAL

La despreocupación por el futuro crecimiento de la producción y del empleo ha sido total. No ha habido ninguna política de inversión fuera de la decisión de postergar toda iniciativa al respecto y, ahora en medio de la crisis, de recortar sin criterio técnico ni financiero alguno, la compra de repuestos y de insumos, llevando la industria básica del Perú al borde de la quiebra.

Sabiendo que se estaban generando déficit de producción nacional en rubros fundamentales como los productos siderúrgicos, fertilizantes, petróleo, etc. el gobierno abandonó toda política de inversión pública. En otros rubros el gobierno de García cedió en exclusiva dicha responsabilidad al sector privado que tenía grandes excesos de capacidad de planta y que estaba concentrado en preocupaciones de corto plazo. Al momento de

llegar al pleno uso de dicha capacidad, hacia 1987, ya las reservas estaban declinando rápidamente y anunciando una próxima recesión y caída de la demanda, además de nuevas oportunidades de ganancias especulativas.

El resultado del abandono de la responsabilidad de invertir es la ausencia de perspectivas de salida a la crisis en los próximos años.

La ausencia de políticas de inversión se refleja en la carencia de reglas de juego adecuadas y estables y en la inestabilidad crónica de las relaciones entre el gobierno y los sectores empresariales de la economía.

En sus años de gobierno García, pasó de la crítica al 25% superior de la distribución del ingreso a la alianza con la cúpula del capital monopólico financiero-industrial y de ahí a la ruptura de su vínculo con ellos y a la posterior intentona de restaurar relaciones. La rivalidad política interna al partido de gobierno paralizó los intentos iniciales de generar una dinámica positiva de inversión y políticas como la del Fondo de Inversión y Empleo fueron mal diseñadas y peor aplicadas perdiendo el Estado todo control sobre el proceso de inversión y todo criterio para establecer una política de importaciones que asegurase la continuidad de las inversiones críticas en medio de la crisis.

El desdén inicial hacia la exportación se transformó cuando ya estaba la crisis encima, en un conjunto de políticas erráticas y exageradas de incentivos con el fin de generar un milagro exportador imposible que le sacara de apuros a un gobierno acorralado.

El resultado de toda esta desastrosa política de inversión es la continuación de la descapitalización del país sin alternativa de crecimiento de largo plazo.

La inexistencia de un proyecto nacionalista de largo plazo le impide al gobierno aprista un nuevo tratamiento de la inversión extranjera lo que da lugar a la parálisis de la política hacia la Southern, al deterioro de la producción petrolera en la selva y a la desesperación por firmar un contrato inconveniente con la Shell. La indefinición en este campo y la renuencia a aceptar un debate nacional sobre los proyectos de inversión de largo plazo impide el establecimiento de reglas que, sobre la base de la defensa de la soberanía nacional y de los intereses mayoritarios, permitan la contribución del capital extranjero.

Hoy, en medio de la peor crisis de la historia nacional no hay inversiones en marcha que nos permitan avizorar un futuro próximo más promisorio. La política oficial se despreo-

cupó de sembrar para el futuro y se comió la semilla que debía servir para la cosecha de mañana. Su irresponsabilidad será recordada por muchos años.

4.- EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO Y EL DESGOBIERNO

Respecto del Estado y su transformación, la gestión ha sido desastrosa dejando al país sin capacidad de respuesta soberana en muchos campos. El gobierno aprista nació con retórica pero sin brazos ni decisión firme para cumplir sus promesas. La premeditada falta de planificación y el desorden promotor de la corrupción, han permitido que la escasa inversión realizada sea inadecuada y que el propio personal estatal esté desmoralizado, sin objetivos y con una creciente corrupción.

El aparato estatal, desmantelado y debilitado desde el gobierno del Gral. Morales Bermúdez. El Gobierno del presidente García continuó la política de debilitamiento estatal, la política de actuar sin plan de gobierno y de las marchas y contramarchas, haciendo más difícil aún el manejo ordenado de la economía.

Este gobierno tampoco ha reestructurado el aparato estatal que ya lleva veinte años desde que el general Velasco lo modernizó. Se hace necesario fusionar ministerios, transferir diversos tipos de instituciones estatales a los gobiernos locales, descentralizar la actividad de ejecución y, en general, es imprescindible organizar la administración para que pueda cumplir las tareas multisectoriales imprescindibles evitando coordinaciones innecesarias y facilitando la que tienen que hacerse con el pueblo organizado.

La presión fiscal fue disminuida sustancialmente en favor de los grandes capitalistas, el gasto público tuvo que ser reducido pero, aún así, el déficit fiscal se mantuvo alto, debido a los crecientes gastos en deuda externa y en los rubros de Interior y Defensa.

El Estado está, de ese modo, siendo debilitado y desprestigiado por los mismos que evaden sus responsabilidades tributarias y corrompen a funcionarios mal pagados como consecuencia de la misma prédica de los evasores contra el gasto público. El APRA ha empeorado esta situación.

En cuanto al manejo del aparato estatal, incluyendo las empresas públicas, ha predominado un manejo burocrático y sectario habiendo sido administrado con criterio clientelista sin utilizarlo como instrumento para conducir la transformación de la economía. Nada se ha moralizado, al contrario se están produciendo modalidades de saqueo que compiten con las épocas más vergonzantes de la administración pública.

Se utiliza, como siempre, el poder político para presionar o corromper a los magistrados. A cambio de otorgar promociones en la carrera judicial a través de la bancada parlamentaria, se logra modificar la recta administración de justicia. No son pues solamente ciertos funcionarios públicos sino también los representantes políticos los que utilizan su investidura para beneficio personal.

La política antiterrorista ha sido, como ya señalamos, la continuación de la estrategia unilateralmente militar y represiva del acciopepecismo. A pesar de los llamativos y mundialmente conocidos gestos iniciales, se han encubierto genocidios y depreciado denuncias sobre la guerra sucia y no se han definido responsables ni juzgado a los culpables de la masacre en los penales.

La diplomacia, pese a tener aspectos positivos que apoyamos, como la defensa de Nicaragua, la creación del Grupo de los Ocho, la posición frente al EMI y a los Estados Unidos, etc. no ha sido una herramienta fundamental para el cambio. Por el contrario, muchas veces, la diplomacia del APRA ha sido declarativa, destinada a ampliar el campo de juego político del presidente García y a crear una ilusión pasajera o a esconder una práctica contraria al discurso.

IV) EL DEBATE PROGRAMÁTICO CON LA DERECHA ORGANIZADA EN EL FREDEMO

La izquierda no ha respondido adecuadamente a la renovada ofensiva ideológica y programática de la derecha reunida en el FREDEMO, ni a las otras posiciones afines que estuvieron presentes en la escena política nacional desde la segunda fase del gobierno militar.

La derecha ha estado y está muy activa en la lucha ideológica. Busca nuevos mensajes que sustenten su práctica política y la presenten como una alternativa de gobierno a pesar del agotamiento del modelo de desarrollo capitalista. Busca también acercarse a los sectores populares y deslegitimar los planteamientos ideo-políticos de la izquierda. Aspira así contener el avance objetivo de las fuerzas populares que hoy constituyen una clara y probable alternativa de gobierno y poder. Y ello obedece, por un lado, a cambios profundos en nuestra sociedad que se expresan en el fin del Estado oligárquico, y en la emergencia de sectores populares que rechazan la pobreza, segregación y explotación y reivindican su derecho a transformar el país, y participar en el nuevo rol social del Estado.

Por esa razón, el debate programático con la derecha reunida recientemente en el FREDEMO tiene que tomar en cuenta sus expresiones ideológicas agotadas, pero sobre todo las recientes ofensivas ideológicas y programáticas.

Los sectores más tradicionales de la derecha peruana no han renovado su proyecto liberal a ultranza. Sin embargo desde hace 3 décadas lo envuelven con un discurso demagógico y una práctica populista, para esconder su verdadera esencia antipopular, anticomunista

y sectaria. La vieja prédica liberal, apátrida y antipopular, ya no encuentra eco en la opinión pública nacional. En los últimos tiempos, su sometimiento al FMI y al imperialismo dio lugar a la más estrepitosa derrota electoral de estas fuerzas. La sumisión al imperialismo, lo descañado de sus políticas recesivas y la hostilidad hacia las conquistas populares y hacia los últimos rezagos del velasquismo han colocado a esta derecha en un lugar político inequívocamente lejano del aprecio popular.

Sin embargo en el plano internacional, en las últimas décadas, han habido renovaciones dignas de consideración. La crisis tanto de la economía capitalista internacional, como de la política keynesiana de intervención estatal creó las condiciones para el surgimiento del neo-liberalismo. Los éxitos de ciertas experiencias de crecimiento económico (Taiwan, Corea) fueron interpretadas como logros del neo-liberalismo y en ese sentido ampliamente propagandizados por la intelectualidad neo-conservadora. Esto dio lugar a un renovado triunfalismo y a una ofensiva ideológica en el mundo capitalista que también llegó a nuestro país.

El neo-liberalismo resultó un arma teórica importante que el imperialismo y los sectores reaccionarios utilizaron para sustentar la apertura de los mercados protegidos de los países subdesarrollados y reducir el costo de la crisis en los países capitalistas industrializados, sin importarles, por supuesto, que este proceso acentuará su profunda crisis.

La crisis económica y política de la dictadura militar de Morales Bermúdez sirvió de pretexto para importar y resucitar un antiestatismo que no se veía desde los gobiernos de Odría y Prado. Este cuestionaba las reformas puestas en marcha en los años 60 y 70.

En este marco se han dado dos ofensivas programáticas de gran impacto por parte de la derecha, pero también se ha visto el retroceso parcial de ambas.

La primera ofensiva programática de la clase capitalista en el país, que fue liderada por ADEX e intelectuales afines, ocurre en la segunda mitad de la década pasada. Consistió en el intento de colocar como punta de lanza del desarrollo capitalista nacional a los sectores exportadores de manufacturas y en reordenar toda la economía interna para poder financiar y subsidiar a estos sectores.

Tras un éxito inicial en las exportaciones manufactureras, debido principalmente a la crisis del mercado interno, a la expansión momentánea del mercado internacional y a las grandes devaluaciones de la moneda nacional, el impulso se agotó y con él, los aspectos más agresivos de la ofensiva programática.

La carencia de un diagnóstico adecuado de la realidad económica nacional e internacional había estimulado expectativas exageradas que no se cumplieron, generando decepción en el propio seno de los empresarios y del Estado. Y por otro lado, la posición antilaboral que el proyecto "exportacionista" exhibía colocó a la izquierda al frente, imposibilitándose así un consenso nacional suficiente como para mantener en vigencia políticas favorables al sector exportador manufacturero.

A partir de entonces, el problema de la exportación manufacturera volvió a cauces menos triunfalistas y los empresarios exportadores perdieron parte del liderazgo que habían logrado.

En este contexto, las demandas populares y el desarrollo del mercado interno, pero también la confianza de la derecha en las grandes inversiones extranjeras en materias primas, volvieron al primer plano del debate y de la política nacional.

El Plan de Gobierno de IU para 1985-1990 deslindó con esta ofensiva programática y puso a la exportación manufacturera en el lugar que le corresponde. Desde IU, el problema fundamental reside en la necesidad de incorporar el indispensable esfuerzo exportador al interior de un proyecto económico que se oriente a la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestra población en base a la utilización plena de nuestras capacidades y recursos. Sólo dentro de este proyecto popular y a su servicio, las políticas de estímulo a la exportación manufacturera serán beneficiosas para el pueblo.

La ausencia de divisas en el momento actual puede reverdecer estos planteamiento "exportacionistas" pero la situación del mercado internacional y la escasa capacidad de oferta exportable actual, auguran un perfil ideológico y programático menos agresivo que el desarrollado en los últimos años de la década pasada. Además, las corrientes derechistas que apuestan a cualquier inversión directa extranjera, como alternativa fundamental para impulsar el crecimiento económico han conseguido que el gobierno aprista apruebe la modificación de la Decisión 24 del Grupo Andino para flexibilizar las condiciones de la inserción de dicha inversión en el país.

La segunda ofensiva ideológico-programática de la derecha peruana tiene la misma ambición que la anterior pero añade un mayor componente doctrinario liberal y, a la vez, realiza mayores esfuerzos por enraizarse en los sectores populares.

El ILD es la institución más representativa de esta ofensiva. Su máximo momento político lo adquirió a través del movimiento "Libertad" en la lucha contra la estatización del sistema financiero propuesto por el gobierno aprista. El objetivo político fundamental de su formulación original, era constituir una base social capitalista en el seno de los sectores populares con la intención de llevarlos a un pacto con la gran burguesía. Según ellos las principales causas de la decadencia del capitalismo peruano eran las trabas burocráticas, la participación del Estado en la economía (no sólo como empresario sino que cuestionaba también el gasto en la atención de los servicios públicos) y la sobreprotección al trabajador que ya consiguió un empleo.

En la perspectiva consecuentemente liberal en la que se situó originalmente el planteamiento del ILD señalaban que la alianza entre el Estado y la gran burguesía aliada al imperialismo impedía la emergencia de nuevos contingentes de capitalistas por medio de la creación de trabas principalmente jurídicas que protegían a ambos de la fiscalización de la sociedad y a los grandes capitalistas de la competencia.

El proyecto liberal, proponía un capitalismo idealizado sin monopolios aliados al Estado y sin intervención estatal, recuperando así para la causa capitalista el antiestatismo y el rol fundamental del mercado en el país. La diferencia con la derecha tradicional no era ideológica, sin embargo, por un lado, el aparente antimonopolismo original chocaba con los intereses de la gran burguesía monopólica nacional y extranjera, y por otro, el discurso contra la alianza de este sector con el Estado afectaba intereses inmediatos.

Las medidas inmediatas que proponían eran, eliminar las trabas jurídicas al funcionamiento del libre mercado, reduciendo el intervencionismo estatal en muchos campos de la economía, y destruyendo su capacidad de satisfacer las demandas sociales y eliminando muchas de las conquistas populares: especialmente las relativas a la estabilidad laboral, a las condiciones de trabajo, al derecho a un salario digno y a la participación en las decisiones económicas, etc.

Los aspectos ideológicos, los intereses de clase, y el respaldo imperialista, comunes al ILD y a los gremios dominados por los grandes capitalistas, pesaron más que los purismos doctrinarios liberales del primero y han dado lugar a retrocesos en tres frentes.

- 1.- Los defensores del proyecto liberal, al establecer una alianza con el gran capital llamado "formal-informal" explicitan la derrota de sus planteamientos programáticos antimonopolistas;

2.-Al incorporarse, a través del movimiento "Libertad", en el FREDEMO se pone en evidencia que la única posibilidad política de un proyecto liberal a ultranza pasa por aliarse con los viejos y desprestigiados liderazgos de la derecha peruana,

3.-Al virar el discurso ideológico del grupo "Libertad", levantando ahora oportunista y demagógicamente los problemas de la miseria popular y de la violencia, se muestra que han percibido la escasa audiencia nacional a cualquier planteamiento que desligue el problema de la democracia del derecho a la vida de todo el pueblo.

En las actuales circunstancias de crisis y de políticas de ajuste recesivo y antipopular, la derecha, en proceso de unificación política ideológica y programática, toma la ofensiva en la crítica a la política del gobierno tratando de ocultar su aprobación de los aspectos más recesivos y antipopulares y su rechazo a los incrementos de salarios y a la selectividad de la reactivación del aparato productivo anunciada por el Gobierno.

Las críticas superficiales a los paquetes económicos son convertidas por los medios de comunicación y la agresividad verbal contra el Gobierno en aparentes críticas de fondo. Tras ellas, se esconden, con gran habilidad propagandística, las mismas recomendaciones fondomonetaristas de ajuste recesivo que unifican a todas las corrientes derechistas, incluido el SODE: devaluar, acelerar la inflación, elevar los márgenes de ganancia, reducir la capacidad adquisitiva de las remuneraciones y la demanda de productos nacionales, contraer la producción y el empleo, para finalmente, disminuir las importaciones, frenar la caída de las reservas internacionales y tener algo que ofrecer a los acreedores internacionales.

A pesar de que este enfoque fondomonetarista es el que domina en los paquetes del gobierno actual, la derecha no está satisfecha y quiere que la crisis económica sea más drástica e inmediata y que los aumentos de remuneraciones y la selectividad en favor de una canasta popular y de ciertos sectores productivos esenciales sean reducidos a su mínima expresión mientras se autorizan o se permiten aumentos de precios mucho mayores que los aumentos de los costos.

En resumen, en el momento actual la derecha peruana da pasos acelerados para reconstituirse como opción política y programática unificándose en torno al rechazo a toda responsabilidad social del Estado que ponga en riesgo sus privilegios; a toda

concepción participativa de la democracia que obligue a la transparencia en la toma de decisiones de importancia nacional; a todo nacionalismo político y económico que nos enseñe a basarnos sobre todo en las propias capacidades, posibilidades y recursos; a toda planificación que ponga orden y dirección a la economía peruana; a todo desarrollo cultural que afincado en sus raíces nacionales recoja lo mejor de la cultura universal, y en general, a toda política que proteja la vida del pueblo y su progreso a costa de los privilegios concentrados en ínfimas minorías.

V.- LOS LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS DEL GOBIERNO DEMOCRATICO Y ANTIMPERIALISTA Y NO ALINEADO DE IZQUIERDA UNIDA.

Los Lineamientos programáticos del Gobierno Democrático y Antimperialista tienen por finalidad establecer los criterios orientadores de las múltiples acciones inmediatas que se tendrán que realizar en las circunstancias de un próximo gobierno de Izquierda Unida. Las acciones mismas a desarrollar se determinarán en el proceso de elaboración del Plan de Gobierno 1990-1995 con la participación de profesionales, obreros y empleados, pobladores y campesinos. El gobierno de I.U. asumirá como suyas las tareas nacionalistas y democráticas que el gran capital monopólico aliado al imperialismo seniega a acoger. Por eso, el gobierno que I.U. propone para el periodo actual se denomina DEMOCRATICO Y ANTIMPERIALISTA Y NO ALINEADO.

A la vez, los lineamientos programáticos tienen que ayudar de inmediato en la organización del pueblo y en la generalización de la conciencia democrática y nacionalista necesarios para fortalecer el autogobierno popular, debilitar a las fuerzas antidemocráticas y antipatrióticas y desarrollar el poder popular, sin perder de vista su objetivo de liberación nacional y su destino socialista.

El gobierno Democrático Antiimperialista y No Alineado de Izquierda Unida en su camino al socialismo tiene que responder a expectativas populares muy precisas, profundas y urgentes, y también a circunstancias objetivas, nacionales e internacionales

, muy duras. Para ello tiene que basarse, no sólo en las fuerzas populares y profesionales organizadas en la IU, sino en la más amplia unidad de todas las fuerzas políticas y sociales de identidad democrática y antimperialista. En ese sentido convoca a todas aquellas organizaciones y personas dispuestas a asumir la responsabilidad de gobernar con el pueblo y al servicio del pueblo, y con el apoyo internacional de países y pueblos hermanos.

A.- Lineamientos generales:

1.- La DEMOCRATIZACIÓN del país para eliminar toda expropiación de la voluntad soberana del pueblo; toda discriminación que, por razón de raza, cultura, poder económico o cualquier otra causa, impida el pleno despliegue de las potencialidades del pueblo; toda violación de la dignidad humana, en particular, de los derechos humanos adquiridos en larga lucha contra la opresión y la explotación.

2.- La NACIONALIZACIÓN del país para determinar soberanamente el curso del desarrollo peruano; para reestructurar la economía y crear nuevas oportunidades de trabajo para la juventud; para adoptar una política internacional plenamente soberana y No Alineada.

Por la bandera democrática que enarbola, IU garantizará y profundizará el ejercicio cotidiano y a todo nivel del poder del pueblo organizado, pues justamente la democratización consiste en la creciente presencia y protagonismo popular en todos los niveles de decisión de la actividad pública y privada, en el desarrollo de todas las formas de autogobierno y de democracia directa, en la promoción de nuevas y eficientes fórmulas de fiscalización y participación popular extendiendo y superando los marcos de la democracia representativa y sobre la base de una economía planificada y pluralista. Y, asimismo, consiste en la existencia de un pluralismo político, en el respeto a derechos civiles y políticos, tales como libertad de expresión, organización, creencia, etc., y en la vigencia plena de todos los derechos humanos.

Izquierda Unida recoge así el legado de una larga historia de lucha en la que los oprimidos y explotados han desarrollado y fortalecido un proceso de democratización de la sociedad de signo eminentemente popular, cuyas manifestaciones más importantes son las luchas contra las dictaduras y contra todo esquema autoritario de poder en el ámbito local o regional; el grado de centralización y organización, así como la amplitud de las luchas del movimiento popular por sus derechos económicos; el inicio de nuevas y diversas formas de autogobierno y democracia directa; las nuevas expresiones de autonomía cultural; la

creación de nuevas formas de solidaridad popular y de diversas fórmulas empresariales populares y autogestionarias. A través de todas esas formas organizativas el pueblo va adquiriendo a gran velocidad nueva conciencia de su dignidad, de sus derechos y de su capacidad para regir directamente los destinos del país. Todo este proceso apunta a la configuración de un nuevo orden estatal y social cada vez más democrático y nacional que choca con creciente fuerza con la actual estructura de privilegios en favor de los grupos de poder monopólico, económico y político, con la violación de los preceptos constitucionales que favorecen al pueblo y cautelan su dignidad humana, con la sumisión a los dictados del imperialismo.

El antimperialismo que I.U. enarbola consiste en el rechazo de toda dominación económica y política por parte de los países capitalistas centrales y las empresas transnacionales, y en la ampliación de los marcos de la soberanía nacional dentro de una América Latina cada vez más unida y de un Grupo Andino fortalecido. También consiste en la nacionalización de aquellas actividades fundamentales de la economía que los peruanos estamos en condiciones de dirigir y administrar con ventaja para la libertad y el bienestar de nuestro pueblo, y que son indispensables para poder planificar la economía en función de los intereses nacionales y populares.

La democratización y la nacionalización se refuerzan mutuamente y constituyen las bases para edificar el socialismo peruano en forma creativa y con la participación de las grandes mayorías populares.

La democratización, al distribuir responsabilidades entre más peruanos, permite la utilización de todas las capacidades existentes en el país, así como el desarrollo de nuevas potencialidades, las cuales permitirán nacionalizar cada vez más todos los aspectos del quehacer nacional; aportar a la cultura científica, política y artística universal; y absorber sus nuevos aportes para beneficio de nuestro pueblo.

La nacionalización rescatará nuevos ámbitos de autodeterminación y libertad, la dirección y administración de nuevas actividades y la necesidad de democratizar aún más la sociedad y el Estado para asumir mayores responsabilidades nacionales e internacionales.

Esta mutua alimentación del patriotismo y la vocación democrática, tiene que desarrollarse al interior de circunstancias nacionales y mundiales que condicionan nuestro futuro. Entre las negativas destacan la crisis mundial, la agresividad del imperialismo norteamericano con sus "guerras de baja intensidad" y su resistencia a enfrentar civilizadamente

el problema de la deuda externa y del narcotráfico, y el armamentismo mundial y latinoamericano. Entre las positivas, la creciente presencia soberana de Latinoamérica en los conflictos de Centroamérica y la heroica resistencia nicaragüense a la agresión norteamericana, la mayor afirmación de la identidad europea en la política internacional, el desarrollo asiático y la creciente importancia económica y política del Pacífico, la lucha de decenas de pueblos oprimidos, especialmente el palestino y las transformaciones, diversas pero reveladoras de los avances populares en los países socialistas.

B.- Lineamientos sectoriales

Las contradicciones señaladas en el capítulo II sólo pueden ser enfrentadas desde una perspectiva multisectorial que refuerce las medidas de cada sector y las haga viables. El avance económico no puede lograrse sin el político y el cultural; el progreso del pueblo no puede lograrse sin su organización social y sin la descentralización y democratización de la economía y del Estado; el desarrollo nacional no puede lograrse sin el concurso de la economía mundial.

1.- LINEAMIENTOS ECONOMICOS

El lineamiento fundamental, que al mismo tiempo, resume la orientación de la política económica de IU es:

LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES POPULARES EN TODOS LOS LUGARES DEL PERU EN BASE A NUESTRO PROPIO ESFUERZO, CAPACIDAD Y RECURSOS, APROVECHANDO LO MAS ADECUADO DE LA REVOLUCION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA Y DE LA CULTURA UNIVERSAL.

El gobierno de I.U. se centrará en la resolución de los problemas más urgentes del pueblo y en la eliminación de las principales trabas estructurales que lo impiden.

Para ello es necesaria:

a.- La democratización de la propiedad y la gestión económicas.

La democratización de la propiedad y la gestión es la condición fundamental para lograr una política que cautele los intereses nacionales y populares.

Izquierda Unida propone un modelo empresarial pluralista donde el Estado dirija la actividad nacional por medio de la planificación democrática y obligatoria, de la participación de los trabajadores asalariados en la propiedad y la gestión de las grandes empresas públicas y privadas, del estímulo al desarrollo de empresas privadas medianas y pequeñas, individuales y colectivas. Parte indispensable de la democratización de la economía y de la movilización plena de las capacidades humanas y recursos nacionales es el apoyo crediticio, técnico y administrativo, y la garantía de mercado para los productores en pequeña escala de todo tipo empresarial tanto en el campo como en la ciudad. Las empresas autogestionarias y cooperativas así como los pequeños propietarios del campo y de la ciudad tendrán acceso privilegiado a recursos crediticios.

Los trabajadores asalariados, tanto obreros como empleados y profesionales, deben asumir desde la comunidad laboral, la responsabilidad de fiscalizar el funcionamiento de las grandes empresas, públicas o privadas, para asegurar la retención de los excedentes en el país y su inversión productiva, y por ese medio, asegurar la estabilidad laboral, la innovación tecnológica y la reducción de los precios de los productos de consumo masivo para mejorar las condiciones de vida de todo el pueblo.

b.-La nacionalización de la economía.

La nacionalización del aparato productivo que propone I.U. debe ser entendida como un proceso a través del cual las decisiones se adoptan en función del interés popular y nacional y no del interés particular excluyente y apátrida. En ese sentido, el aparato productivo nacional y los beneficios que se obtienen, deben estar al servicio de la satisfacción de las necesidades de la población y del logro del pleno empleo; deben partir de la utilización creciente de las materias primas, insumos, bienes de capital, tecnología y financiamiento nacionales; y deben colocar los excedentes a disposición del desarrollo de la empresa, de la región y del país.

Con esa orientación, se nacionalizarán y democratizarán los grandes grupos de poder oligopólico financiero-industrial que controlan la producción y circulación de los productos de primera necesidad para el pueblo y la economía nacional y se le dará un verdadero sentido democrático a la estatización del sistema financiero. Ningún interés particular puede ser tan poderoso como para determinar el curso de la economía nacional.

c.- El desarrollo integral del agro, el bienestar del campesino y la descentralización.

La opción agraria de IU es por el desarrollo de la Costa, la Sierra y la Selva. La enorme escasez de tierra cultivable en el Perú obliga a impulsar el desarrollo integral de todo el agro como medio para asegurar el bienestar del productor, una ocupación adecuada del territorio nacional, el abastecimiento seguro de las ciudades y la reducción de la dependencia alimentaria. Esto exige impulsar un aumento continuo de la productividad en todo el agro por medio de una estrecha relación del campo con la ciudad en cada región del país, por el desarrollo empresarial de las comunidades campesinas, y por el apoyo tecnológico, crediticio, comercial y de capacitación administrativa a todos los productores pero especialmente a los pequeños propietarios y a las empresas cooperativas.

d.- Proteger la industria y reestructurarla.

La reestructuración industrial debe orientarse a la producción de bienes de consumo masivo, simplificando productos y reduciendo la diversificación de marcas y modelos para ampliar escalas de producción, reducir costos y adquirir una experiencia tecnológica propia. La estructura industrial permitirá de ese modo, nuevas inversiones en la producción nacional de bienes de capital y de insumos esenciales.

Sin embargo, el primer eslabón de las cadenas productivas que es indispensable generar para hacer más autocentrada la economía nacional tiene que ser el procesamiento de nuestros recursos agropecuarios, pesqueros y mineros. La nueva inserción en la economía mundial puede, por ese medio, realizarse sin recurrir a la política del "cholo barato" debido a la buena calidad de muchos de los recursos naturales todavía explotables,

Además, la agudización de la competencia internacional, la mayor inversión necesaria en investigación tecnológica y en comercialización obligan a una concentración productiva que reduzca la innecesaria competencia interna y amplíe el radio de acción empresarial. La combinación de la gran empresa con la pequeña y mediana resulta fundamental para competir eficazmente y enfrentar la desocupación existente.

Parte fundamental de la política industrial del Perú será la descentralización productiva. Para ello, es necesaria una "división nacional del trabajo" que distribuya en el territorio nacional, diversas actividades sin repeticiones ni competencia innecesarias.

e.-Fortalecer la capacidad tecnológica nacional.

El fortalecimiento de la capacidad tecnológica nacional significa fundamentalmente adquirir la autonomía necesaria para la adopción de decisiones tecnológicas teniendo en cuenta la máxima utilización de los recursos nacionales, el pleno despliegue de todas nuestras capacidades humanas y la satisfacción de las necesidades más urgentes de las mayorías populares.

La política tecnológica a implementarse, deberá tener en cuenta la plena utilización de las capacidades tecnológicas disponibles en el país, en particular para el establecimiento de circuitos productivos integrados en zonas rurales y urbanas deprimidas, apoyar la reestructuración del sector productivo moderno disminuyendo progresivamente sus importaciones de insumos, materias primas y bienes de capital, y finalmente crear las condiciones que permitan incorporar planificadamente las nuevas tecnologías sin reproducir los efectos de dependencia que generaron en el pasado.

Lo anterior no implica negarse a recibir el aporte tecnológico externo, sino modificar los términos en que se nos vende y transfiere, para reducir los costos de adquisición y garantizar una completa transmisión de los conocimientos adquiridos.

2.-LINEAMIENTOS SOCIALES.

La democratización de la sociedad como objetivo fundamental del Programa de Izquierda Unida obliga a colocar en un lugar destacado los planteamientos dirigidos a:

a.-Fortalecer las organizaciones populares y sociales.

Las características esenciales para que tales organizaciones se constituyan en factor de democratización y poder popular son:

- i) su autonomía respecto del Estado, impulsando una política de frente amplio y de masas, abierto a todo el pueblo;
- ii) su unidad y democracia interna;
- iii) su derecho a participar en igualdad de condiciones en la formación de organizaciones populares de nivel superior.

Las organizaciones populares y sociales tienen tareas de gran importancia inmediata y estratégica. La respuesta a la crisis económica, a la injusticia y a la violencia cotidiana están en el primer lugar de la agenda programática popular, porque ellos son los que más sufren estos azotes. La organización y la movilización de masas es la respuesta popular a la miseria y a la violencia, a la violación de los Derechos Humanos y a la restricción de las libertades democráticas conquistadas.

Las organizaciones sociales de todo tipo tienen que estar presentes en las instancias nacionales, regionales y locales del Estado de modo de participar en la asignación y gestión de los escasos recursos públicos y combatir la corrupción, la impunidad y la ineficiencia.

El movimiento sindical urbano y rural, las organizaciones de autodefensa popular, las diversas organizaciones de pobladores y de sectores profesionales, los pequeños empresarios y trabajadores marginados, las asociaciones de mujeres y de jóvenes y las que se creen para defender a los ancianos y a los niños constituyen contingentes populares que IU debe aglutinar en un gran movimiento popular. Para ello debe desarrollarse políticas laborales y de empleo, de servicios básicos y de bienestar así como de participación democrática que contribuyan a su fortalecimiento.

b.-Expresar y promover una nueva ética.-

Izquierda Unida considera parte crucial de su proyecto sentar precedentes de una nueva ética, con la convicción de que sin introducirla en su propio actuar dejará de ser la fuerza revolucionaria que el pueblo demanda.

El cambio de la economía peruana es imposible si no viene acompañado de una ética personal de austeridad, solidaridad, autenticidad, y honestidad que se imponga a la lógica individualista impulsada por el capitalismo. Asimismo es necesario redefinir las relaciones interpersonales, respetando el derecho de las distintas expresiones culturales y de las minorías, eliminando las discriminaciones sexistas y las expresiones patriarcalistas para poder forjar relaciones horizontales que hagan posible la democracia.

c.-Forjar la unidad nacional respetando la pluriculturalidad, eliminando las desigualdades y opresiones que impiden al pueblo expresar su solidaridad y creatividad.

d.-Hacer de la ancianidad y la niñez la primera responsabilidad de gobierno.

c.-Alcanzar la plena vigencia de los Derechos Humanos.

3- LINEAMIENTOS ESTATALES.

Para IU no hay transformación del Estado sin una efectiva y cotidiana participación popular en el funcionamiento estatal.

Es necesario hacer transparentes las decisiones públicas y compartirlas democráticamente para terminar con la pasividad burocrática; para fiscalizar, moralizar y mejorar la recaudación tributaria y la asignación y eficiencia en el uso de los recursos; para garantizar la continuidad de la labor pública, asegurar el empleo y la promoción del funcionario eficiente independientemente de su filiación política y defender los intereses nacionales, regionales y locales.

El eje de Izquierda Unida en el campo de la organización estatal para este periodo es, por todo ello, el fortalecimiento de las conquistas democráticas dentro del aparato estatal. Sobre esta base el gobierno de I.U. promoverá aquellas transformaciones de la actual estructura estatal que apunten a simplificarla, a transferir funciones y decisiones al pueblo organizado, crear condiciones materiales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos por parte de las mayorías populares. Esta democratización ocurre principalmente a través de:

- i) la participación de las organizaciones sociales en las decisiones públicas a todo nivel;
- ii) las experiencias de autogobierno popular;
- iii) el acceso popular a los medios de comunicación estatales y privados, y
- iv) la responsabilidad principal de la población organizada en la labor de seguridad interna.

La participación popular en el funcionamiento regular del Estado debe darse en el nivel nacional, regional y local. La democratización de los gobiernos locales y regionales son la prioridad programática de IU. Asimismo, impulsará la progresiva participación democrática en la administración de justicia y velará porque los casos de corrupción sean difundidos públicamente como sanción civil.

Las empresas públicas deben someterse a un esquema de planificación e incorporar la cogestión en todos sus niveles.

El concepto de seguridad nacional, lo entendemos como una seguridad integral, en sus fines y en sus medios, y no solamente territorial o militar. Ello implica que un país fuerte y seguro no es aquel que sólo tiene una Fuerza Armada poderosa, sino que cuenta con un proceso dinámico de desarrollo económico y con una organización social sin grandes desigualdades ni discriminaciones.

En este sentido valoramos aquellos aspectos que con este espíritu fueron parte de la concepción de seguridad elaborado en el seno de la Fuerza Armada peruana, principalmente durante el gobierno del general Velasco, que articulaba seguridad con desarrollo y con bienestar de la población y cuestionaba el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por partir de una falsa concepción de seguridad continental contraria a la soberanía nacional de los países latinoamericanos y del Caribe.

El nuestro, como todo país, requiere de una Fuerza Armada bien equipada, material y moralmente, y con profunda conciencia patriótica para cuidar su integridad territorial como parte de la defensa de la soberanía nacional. Por ello se hace indispensable diseñar recursos para su equipamiento, situación que debe ser manejada de acuerdo a nuestras escasas posibilidades económicas y buscando detener la carrera armamentista dentro de una concepción diplomática integral.*

* Con posterioridad a la aprobación de los lineamientos estatales, por el CDN de IU, el PUM ha solicitado introducir en esta parte la siguiente nota:

"El Partido Unificado Mariateguista considera que estos lineamientos merecen una discusión más amplia en particular en lo que se refiere a la relación entre las formas embrionarias de democracia directa de masas y el actual régimen estatal, así como en lo que se refiere al papel que le toca cumplir a un gobierno de IU en la perspectiva de un régimen estatal alternativo. Por último, considera que los párrafos acerca de las FF.AA. deben incluir una caracterización de la conducción, el rol y la estrategia que hoy están vigentes en su seno. Por ello señalamos que en el curso del debate hacia el Congreso, el PUM presentará una propuesta global de reformulación de este punto".

El gobierno sobre la base de la lucha por la justicia social, deberá desarrollar un combate consecuente por la pacificación del país. Para ello, ejerciendo el mando sobre la FF.AA. y el pleno control de la responsabilidad política que le corresponde a la autoridad civil,

especialmente en las Zonas de Emergencia, promoverá la organización popular para que ella cope los espacios hoy desestructurados por la guerra sucia. El gobierno de I.U. modificará la estrategia antisubversiva violadora de los Derechos Humanos y abrirá paso a propuestas integrales de pacificación.

En lo que respecta a la seguridad interna, IU plantea que esta es responsabilidad básica de la población organizada y por eso promueve la autodefensa popular y los frentes de defensa. Las fuerzas policiales serán especializadas en la prevención del delito y la seguridad de los bienes y de las personas.

4- LINEAMIENTOS DESCENTRALISTAS.

La descentralización es otro elemento fundamental del programa de IU. Bien entendida, incluye diversos aspectos.

a.- Todo proceso auténticamente descentralista respeta, aprecia y promueve la diversidad y la pluralidad dentro de un proyecto nacional unitario. Esa pluralidad es múltiple y abarca los aspectos culturales, étnicos, lingüísticos, políticos, económicos, etc.

Para IU la unidad nacional se forja no sólo desde el Estado sino fundamentalmente desde las bases sociales, por ello nuestro objetivo prioritario es desarrollar, consolidar, centralizar y legalizar las organizaciones populares.

b.- La pluralidad que proponemos no implica pérdida de la unidad porque la identidad nacional tiene en su constitución misma el aprecio por la pluralidad, porque la unidad económica del país que construimos está basada en una división nacional del trabajo que hace de la economía nacional una sola estructura y porque la unidad política no es ya la excusa para prolongar el dominio limeño sobre el país y fortalece las reivindicaciones de cada una de sus regiones.

La transferencia de recursos de las regiones con mayores recursos generadores de renta a aquellas que no disponen de ellos es también parte importante del programa de IU y un factor más en la forja de una unidad nacional por encima de las diferencias naturales.

c.-El descentralismo pretende hacer iguales las oportunidades de progreso en cada región del Perú. Esto supone un descentralismo en el que la prioridad está en el desarrollo de las fuerzas productivas regionales y en la creación de relaciones sociales que permitan a todos acceder a los beneficios del esfuerzo y la productividad. Descentralismo político sin desarrollo regional es reproducción en mayor escala del parasitismo burocrático, de la dependencia centralista y, por reacción, del separatismo.

d.- Las dificultades de transporte obligan a un procesamiento máximo de recursos naturales en su origen y a una política regional de carreteras, transporte acuático y aéreo según los casos. Los recursos energéticos regionales deben abastecer cada región en todas sus necesidades exportando a otras los excedentes. Dadas las características de la geografía nacional la máxima modernización de las telecomunicaciones intrarregionales debe ser prioridad para hacer más eficiente el transporte y, en toda la medida de lo posible, sustituirlo con el fin de reducir la necesidad del movimiento físico sobre todo de personas.

e.-La descentralización no puede mantener el dominio de élites provincianas especialistas en la explotación del campesinado y principales beneficiarios del centralismo nacional. La organización del Estado y de la sociedad que proponemos está encaminada a impedir ese riesgo.

f.-La descentralización del aparato estatal tiene por finalidad principal aumentar la presencia popular en el Estado y no la presencia del Estado en las regiones. IU impulsa la participación de las organizaciones sociales en los gobiernos regionales y locales, y de los gobiernos locales en los regionales. Esta descentralización está entonces estrechamente vinculada a la democratización del país. Esa presencia debe ser más directa, masiva y completa a nivel de gobierno local.

g.-La descentralización debe permitir un cambio de enfoque y de práctica en el combate al terrorismo y la guerra sucia poniendo por delante la lucha de masas contra la injusticia, por el respeto de los derechos humanos y por el desarrollo económico social. En tal sentido, se deben garantizar la vigencia de los derechos cívicos y sindicales en todo el territorio nacional.

h.-Las regiones fronterizas y portuarias tienen la responsabilidad de cautelar los intereses económicos del pueblo y de la nación, particularmente en lo que concierne al comercio exterior. El desarrollo industrial fronterizo y su orientación hacia el mercado interno son necesarios para que los intereses comercialistas, favorecedores del contrabando y del dumping contra la producción nacional, sean subordinados frente a los intereses productivos del país.

i.-Las regiones fronterizas son depositarias primeras de la responsabilidad de cautelar la intangibilidad del territorio y la identidad cultural nacional. Ello conlleva la obligación de desarrollar una política de educación y comunicaciones particularmente centrada en el aprecio y la responsabilidad por el destino nacional y de establecer relaciones de mutuo respeto y colaboración con los países vecinos.

5.- POLITICA EXTERIOR.

La política exterior de Izquierda Unida tiene entre sus objetivos principales ser palanca del proceso de liberación definitivo de nuestro pueblo y servir al proyecto de transformación de nuestra sociedad. Por ello se sustenta en la naturaleza nacional, democrática y popular de su gobierno, al mismo tiempo que se rige por los principios del no alineamiento, del antimperialismo y de la solidaridad con las naciones y pueblos oprimidos del Tercer Mundo.

La política exterior soberana, no alineada y antimperialista que propugnamos, busca también la unidad de América Latina, especialmente de los países andinos, unidos por lazos históricos, económicos, políticos y culturales. Asimismo se orientará a aumentar el prestigio internacional del Perú y su capacidad de negociación en el ámbito externo. Finalmente aspira a un nuevo orden internacional económico y político donde se ponga fin al uso de la fuerza para que impere la paz y el respeto mutuo y el beneficio recíproco; donde el principio de autodeterminación y el pluralismo ideológico serán respetados por todos; un mundo donde no exista el racismo, la coerción económica y política y donde todos los pueblos y naciones tengan el derecho de adoptar el sistema económico, social y político que crean conveniente.

Por ello, nuestro accionar está orientado a:

- a) Ejercer una política exterior no alineada, como opción histórica del Perú y de los países medianos y pequeños que deseen efectivamente evitar que sus decisiones sean condicionadas por las potencias imperialistas.
- b) Afirmar una política exterior coherente de defensa nacional que resguarde la soberanía en los diferentes ámbitos del espacio nacional, sustentada en una estrategia de paz y en el respeto a los tratados internacionales y en la reducción del armamentismo
- c) Rescatar la presencia histórica de nuestro pueblo y del Perú en el continente, para propiciar la unidad y la integración económica y política de América Latina contra toda forma de dominio externo e intervención imperialista.
- d) Defender activamente los derechos humanos, políticos sociales y económicos como condición básica para la convivencia libre entre las naciones.
- e) Propiciar un mundo libre de armas nucleares, desterrando el chantaje y la amenaza nuclear.
- f) Solidaridad plena con los pueblos que luchan por erradicar la práctica inhumana del racismo institucionalizado (Apartheid).
- g) Llevar a cabo una política exterior en favor de un nuevo orden internacional y de la solidaridad con las aspiraciones de los pueblos del Tercer Mundo, buscando erradicar del escenario internacional el peligro de guerra, la práctica de políticas bloquistas, neocolonialistas e imperialistas y la eliminación del uso de la fuerza. Apoyo a Nicaragua en su lucha contra el gobierno norteamericano, y a la OLP.

6.- POLITICA CULTURAL.

Nuestra visión de la cultura en el Perú se origina en nuestra práctica política, entroncada con la experiencia de los grandes movimientos populares que vienen transformando y redefiniendo nuestra realidad social y cultural, en su pugna por la supervivencia, por una autonomía que afirme normas de comportamiento y escalas de valores alternativas al modelo dominante y también, por una liberación definitiva.

Por eso, la base de nuestra propuesta cultural está ya inmersa en el conjunto de las propuestas de IU. Tiene en efecto un hondo significado cultural el camino que buscamos abrir para que el pueblo potencie sus capacidades de relacionarse de manera nueva con la naturaleza para recrearla y poner sus frutos al servicio de sus propias necesidades. Lo mismo se puede decir de nuestro programa de democratización de la sociedad y de transformación del Estado, y de nuestro objetivo de conquistar, desde el poder adquirido, el reconocimiento de la dignidad y del derecho a la vida de cada peruano. La mirada hacia las regiones y hacia el exterior del país completa lo fundamental de una propuesta programática cuya fuerza primera está en la vida cotidiana del pueblo para desplegar a cabalidad lo más valioso de su potencial cultural.

Nuestra experiencia en la lucha de masas nos revela día a día los inmensos recursos culturales de nuestro pueblo, su ingenio en la resistencia individual y colectiva, en el combate por la supervivencia diaria y por el futuro. El trabajo político de IU tiene que ser, también, un trabajo cultural que, partiendo del reconocimiento de la enorme riqueza cultural del pueblo, trabaje desde ella para que no sea asimilada y reducida por el poder dominante y para que, de lo contrario, esta fuerza cultural, renovada y transformada ante los nuevos retos de la historia, se convierta en punta de lanza de la construcción del socialismo en nuestra patria.

En las últimas tres décadas, junto con los procesos de urbanización masiva, de la relativa industrialización y de la educación generalizada, han empezado a desarrollarse desde una óptica popular nuevos intercambios entre las distintas expresiones culturales, que empiezan a crear nuevas condiciones para la creación de un país en donde todas las sangres, de que nos hablaba José María Arguedas, no sólo convivan conflictivamente, como lo han hecho hasta ahora, sino que por fin se fusionen y empiecen a construir juntas un futuro nacional, basado en el respeto mutuo entre las culturas.

La realidad cultural actual del Perú tiene diversas raíces, ninguna de las cuales ha logrado, en la actualidad, conformar una propuesta hegemónica a nivel nacional. Hay, no obstante, una simbiosis cultural que José María Arguedas definió correctamente como aquella de "todas las sangres" que tendrán que reelaborar una nueva identidad nacional que

solamente podrá lograrse enrumbando al país en la vía al socialismo. Es decir, es precisamente a partir de la construcción de una nueva ética social que surgirá aquella identidad nacional basada en la construcción de lo popular. Siendo la nuestra una realidad pluricultural, lo popular será el producto del intercambio respetuoso entre las culturas que habitan nuestro territorio.

Dicho más directamente: lo popular está por construirse a partir de su capacidad de lucha, de su creatividad libre y de una ética social que únicamente el socialismo puede lograr.

De lo contrario ocurre lo que ahora vemos: las relaciones interculturales están enmarcadas en un sistema de clases que impide la forja de una identidad nacional. IU tiene como objetivo: desplegar una personalidad democrática y nacional propias en todos los campos de la actividad humana para interactuar en el mundo de hoy y del futuro.

Los objetivos programáticos son:

- i) La defensa del patrimonio cultural, comprendida la naturaleza.
- ii) La organización democrática de la promoción cultural del Estado.
- iii) La conquista de una educación democrática y de calidad.
- iv) El desarrollo de una capacidad científica y tecnológica.
- v) La transformación de la universidad en centro de excelencia académica, en escuela de democracia y de conciencia nacional y popular.
- vi) La democratización de la comunicación social.
- vii) El desarrollo de la recreación, la educación física, los deportes y el arte.

Estos siete objetivos deben ser asumidos de manera interdependiente para formar hombres y mujeres integrales. Sólo así será posible una nueva ética social que diseñe una identidad nacional popular y democrática; vale decir, socialista.

TESIS POLITICAS DE IU

FE DE ERRATAS

Pág. 6 después del tercer punto a parte en la línea 3
dice: ..masas democráticas y revolucionarias ..
debe decir:..masas democrática y revolucionaria.

Pág. 7 después. Los 40 objetivos.. en la tercera línea:
dice: ...articulando la lucha reivindicativa y propuesta..
debe decir:..y articulando- lucha reivindicativa con propuesta

En la línea 11
dice:.. así como la acción
debe decir: así como a la acción

Pág.11 en el punto tres en la primera línea
Dice: a nivel de la acción estatal del Gobierno
debe decir: a nivel de la acción el Gobierno

Pág. 16 en la tercera línea
dice: *a los sectores que conforman al bloque*
debe decir: *a los sectores que conforman el bloque*

Pág. 18 después del primer punto a parte en la cuarta línea
dice: lso gobiernos posteriores
debe decir: los gobiernos posteriores

en la quinta línea
dice:..de las fuerzas armadas al concepción
debe decir: de las fuerzas armadas la concepción

Pág. 20 el tercer párrafo es el cuarto y el cuarto párrafo es el tercero.

Pág. 21 en el sexto párrafo c) agregar después de...organizaciones barriales, por ejemplo en los comedores y comités del vaso de leche.

Pág.48 después del cuarto punto a parte en la sexta línea
dice: así como la acción democrática
debe decir: así como a la acción democrática

ASISTEN COMO
DELEGADOS
PLENOS

LOS DELEGADOS
ELEGIDOS EN LOS
CONGRESOS PREVIOS
INCLUYENDO A LOS
3 DELEGADOS (*)
DE LOS COMITÉS
DIRECTIVOS DE-
PARTAMENTALES



(*) Sec. Gral. más 2

¡EL CON- GRESO NA- CIO- NAL!



- * LOS MIEMBROS TITULARES Y ALTERNOS DEL CDN
- * LOS MIEMBROS DE LA CONAC
- * DELEGACIONES DIRECTAS DE LOS PARTIDOS (GOLO PODRAN LLEGAR AL 25% DEL TOTAL DE DELEGADOS)
- * 3 REPRESENTANTES DE LA COMISION DEL PLAN DE GOB.
- * 3 REPRESENTANTES DEL SECRETARIA-DOMUNICIPAL
- * 2 DE LA CNO

EL PRIMER CONGRESO NACIONAL SERA' LA MAS ALTA EXPRESION ORGANICA DEL FRENTE IU Y SUS ACUERDOS DARAN LA PAUTA PARA CONSTITUIR IU COMO LA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA QUE EL PUEBLO RECLAMA.

**¡PREPAREMOS CON ENTUSIASMO
NUESTRO CONGRESO!**





UNMSM-CEDOC